

ECONOMÍA Y POLÍTICA EN LA TRANSICIÓN. REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

JOSÉ LUIS CORAGGIO

INTRODUCCIÓN: ECONOMÍA Y POLÍTICA

Es difícil escribir sobre economía y política en la revolución sandinista en el momento actual sin poner en el centro del análisis el fenómeno cuya dinámica impregna el movimiento global de la sociedad en esta coyuntura: la guerra de agresión. ¿Cómo hablar de política sin hablar de guerra cuando un país está siendo agredido con la intensidad en que lo está Nicaragua? Sin embargo, en este trabajo vamos a intentar establecer relaciones más generales entre economía y política, que pretendemos son significativas tanto para todo el período de seis años transcurrido desde el derrocamiento de Somoza, como para los años por venir. Otros trabajos destacan la temática de la guerra y sus efectos, por lo que, en conjunto, la cuestión será considerada en este volumen.

De hecho, las teorías políticas suelen estar pensadas para sociedades “cerradas”, o con una dependencia política externa mínima, y suponen además la ausencia de una confrontación militar con fuerzas externas. Las pocas referencias que haremos a la coyuntura militar no salvan esa deficiencia y es nuestra obligación advertirlo. Sin embargo, creemos que esto no invalida las proposiciones fundamentales del trabajo. Por el contrario, en la época actual, si la economía y la escena política internas son pensadas como retaguardia de una guerra contra el imperialismo, la cuestión del sistema político, de la democracia y del poder popular, por un lado, y la cuestión del manejo de las relaciones mercantiles y la relación estado/sociedad civil, por el otro, son centrales en *la construcción de la hegemonía popular, base política de una resistencia exitosa contra el agresor*.

En este trabajo intentamos extraer algunas enseñanzas generales a partir de un análisis crítico de la práctica del estado revolucionario en Nicaragua, con referencia a aspectos centrales, aunque parciales, de la misma. Por tanto, no debe interpretarse como un intento de balance de seis años del proceso revolucionario.¹ En una sociedad capitalista, tiende a producirse una separación formal e institucional entre economía y política. Esta apariencia es una forma

¹ Con referencia a otros aspectos, altamente innovativos y ejemplares, de la revolución nicaragüense en materia política, véase José Luis Coraggio, *Nicaragua: revolución y democracia*, México, Editorial Línea, 1985.

propia de la dominación capitalista y ha sido trabajo de los revolucionarios desmitificarla, mostrando la relación efectiva entre el interés económico de las clases dominantes y las estructuras que sustentan su poder político.²

En procesos de revolución social en los que el gobierno desempeña un papel rector de acuerdo con un proyecto popular, la imbricación entre economía y política tiende a hacerse más clara, aunque subsisten ambigüedades en cuanto al orden del determinismo (por momentos lo político parece determinar lo económico, por momentos a la inversa). La nueva correlación de poder político, lograda a partir del triunfo revolucionario, intenta construir unas bases económicas que le correspondan: el desarrollo de un área estatal de producción, el control estatal de esferas de la circulación, la reinserción en el mercado mundial, el desarrollo de nuevas formas sociales de producción y reproducción, etc. Esto requiere una política económica que combine las transformaciones de largo plazo con una gestión de corto plazo coherente con el proyecto estratégico, pues *el control coyuntural de la economía se convierte en componente fundamental del orden revolucionario*. Las transformaciones macro-sociales que propugna el proyecto popular requieren una intervención, desde posiciones de poder político (no solamente estatal), sobre relaciones de propiedad, de intercambio, de acumulación y de consumo que afectan en uno u otro sentido intereses específicos. La relación entre los intereses particulares y el “interés general”, así como sus tiempos de satisfacción/afectación, es una cuestión que va a tener un fuerte peso en la escena política, donde los diversos sectores sociales pueden ejercer fuerzas según sus expectativas sobre lo que el proyecto revolucionario significará para su existencia material. Esto es válido no sólo para ciertas fracciones de las clases anteriormente dominantes, sino también para amplias capas y sectores populares, que necesariamente contrastan su vida cotidiana con sus expectativas y con el discurso oficial, por momentos utópico, por momentos realista. (Un claro ejemplo de esto último es el programa del FSLN para las elecciones de noviembre de 1984, que planteó sin demagogia la realidad de la situación para los próximos años).

A las dificultades propias de las contradicciones que desarrolla un proyecto revolucionario en una sociedad atrasada, se agrega el esfuerzo de las fuerzas contrarrevolucionarias para desestabilizar la economía y exacerbar sus contradicciones, cuando no por sabotear o destruir directamente el aparato productivo. Por lo demás, las alianzas políticas planteadas por un proyecto de unidad nacional pueden condicionar la política económica en tanto deben atenderse intereses particulares que limitan las transformaciones de orientación popular. Pero también la necesidad de sostener materialmente el proceso

² Véase Tilman Evers, *El estado en la periferia capitalista*, México, Siglo XXI, 1979, y la amplia bibliografía allí presentada. Puede llamar la atención que en nuestro trabajo no reduzcamos el planteamiento a la tríada estado-partido-masas, y que recurramos simultáneamente a la diferenciación estado/sociedad civil. Debe tenerse presente que en Nicaragua existe un sistema político pluripartidista y que hay efectiva competencia política e ideológica, a la vez que subsiste una clase burguesa así como amplias capas pequeño-burguesas urbanas y rurales.

revolucionario es un factor que co-determina los tiempos de la revolución política y sus formas. Así, lograr la cooperación activa de fracciones productivas de la burguesía implica al menos garantizar la reproducción económica de dichas clases como tales.³ A su vez, las bases clasistas de la revolución —obreros, sub-proletarios, campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, profesionales y técnicos— esperan una respuesta a sus reivindicaciones económicas, muchas veces postergadas por el régimen precedente, y su voluntad política no es indiferente a las intenciones y a los resultados que perciben de la gestión gubernamental revolucionaria. *En tanto la vanguardia política tiende a asumir directamente posiciones de gobierno, su legitimidad queda así expuesta a la erosión que supondría no resolver positivamente los diversos intereses particulares de sus bases sociales.*

Partimos de la proposición de que en esta coyuntura y en el contexto histórico de una revolución como la de Nicaragua, la política económica desempeña un papel fundamental, sin duda superior en eficacia al que supuestamente desempeñaría la planificación centralizada según modelos pensados para otras realidades.⁴ Aunque es evidente que procesos como el que atraviesa Nicaragua desde el 19 de julio de 1979 están sometidos a determinismos económicos y políticos que no pueden reducirse al ejercicio de la gestión de gobierno ni encararse sólo desde esa perspectiva, la política económica es, a nuestro juicio, *fundamental en la construcción de la hegemonía revolucionaria.*

Pero es posible que, en la práctica, no sólo se mantenga la escisión formal e institucional entre economía y política, sino que la gestión de la política económica y el ejercicio del poder político tiendan a verse como si efectivamente respondieran a lógicas separables, permitiendo que entren en contradicción dentro de la práctica revolucionaria de conjunto. Esta situación, por analogía con el régimen prerrevolucionario, podría ser vista como pantalla para la dominación de las clases populares sobre las minorías. Creemos que, en realidad, de darse así, crea condiciones para frenar las transformaciones revolucionarias, al impedir visualizar la relación entre el “interés general” y los intereses particulares de los sectores populares. Y esto tiene que ver con *la naturaleza del estado en una transición social como la que presenta Nicaragua.* Sobre esto volveremos al final de este trabajo.

Es desde esta problemática que intentaremos contribuir al análisis de la política económica en el proceso revolucionario nicaragüense, del cual confiamos podrán extraerse conclusiones más generales sobre la relación economía/política en la transición.

³ Sobre “la cuestión burguesa” en la revolución nicaragüense, véase J.L. Coraggio, *op.cit.*, cap. 2.

⁴ Cuando decimos “planificación” nos referimos a un proceso *social* de gestión colectiva de la economía, con una racionalidad de la que participan los agentes económicos bajo la rectoría del estado. El hecho de que en ciertas esferas estatales se redacten documentos prácticamente ineficaces, cuando no desconocidos para los “planificados”, no es planificación.

LA SOBREDETERMINACIÓN POLÍTICA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

La política económica –ese conjunto de intervenciones gubernamentales sobre las condiciones y relaciones económicas de agentes privados y públicos-⁵ está efectivamente sobredeterminada por lo político. Esto es así porque la posibilidad de efectuar la transformación económico-social requiere la consolidación del poder revolucionario. Pero es así también porque *el proyecto revolucionario mismo supone una concepción del sistema político que se quiere instaurar y de la naturaleza del estado y de sus relaciones con la sociedad civil, cuya gestación está co-determinada por el ejercicio de la política económica*. Si la revolución de la sociedad implica una transformación no sólo de la sociedad civil sino también del estado y de las relaciones entre ambos, la política económica, en tanto afecta las bases materiales de la sociedad en su conjunto –pero sobre todo en tanto afecta diferencialmente a diversos grupos y sectores públicos y privados– se convierte en campo privilegiado del ejercicio del poder revolucionario, de confrontación con fuerzas corporativas privadas, de consolidación o debilitamiento de las alianzas de clase, en la pugna por sostener o modificar determinadas configuraciones socio-económicas. Además, en un proyecto político como el que impulsa el sandinismo –profundizar la revolución social sobre la base del consenso popular, avanzando a la vez en la democratización y en la transformación social, construir nuevas formas de socialización manteniendo una economía mixta- *la eficacia de la política económica debe pasar por otra prueba: la de persuasión de los agentes sociales*. Esta persuasión debe manifestarse, obviamente, en la aceptación mayoritaria de la hegemonía revolucionaria en la escena político-ideológica nacional, pero también en comportamientos económicos tendencialmente ajustados al proyecto revolucionario a través de las sucesivas coyunturas.

El interés económico inmediato (y mediato) de los miembros de la sociedad no es un “factor” marginal compensable a fuerza de “concientización”, sino que debe encontrar una respuesta revolucionaria, sea en la práctica inmediata, sea en las expectativas generadas por el proyecto mismo. Entonces, la política económica, que en la Nicaragua actual afecta con fuerza esos intereses, es un condicionante primordial del consenso. Un desafío político fundamental para la revolución es cómo “cabalgar” sobre las contradicciones que va imponiendo la base material estrecha desde la cual se requiere construir una nueva sociedad,

⁵ Nuestro concepto de *política económica* difiere un tanto del corriente, limitado al manejo por parte del estado, de instrumentos considerados “económicos” (precio, tasas de cambio e interés, moneda, etc.) por la naturaleza de los mismos, más que por sus efectos. Incluimos también la política tecnológica, la política de tierras, la política de organización, las leyes de descapitalización y otras que afectan directamente las condiciones económicas de los miembros de la sociedad. Con relación a estos temas, véase J.L. Coraggio, “Estado, política económica y transición en Centroamérica”, en *Estudios Sociales Centroamericanos*, San José, Costa Rica, enero-abril de 1984.

organizando sobre la marcha las fuerzas populares alrededor de las tareas revolucionarias de la economía. Parte de ese desafío exige potenciar la creatividad popular, rompiendo paulatinamente con la alienación generada por leyes económicas que el mercado impone a “espaldas del pueblo”, desarrollando la capacidad de gestión consciente de sus propias condiciones de vida a todos los niveles. En esto es crucial partir del saber popular, de sus comportamientos y expectativas, tanto para la elaboración del discurso oficial como para las propuestas de cambio o reforzamiento en las prácticas mismas. Pues también en las prácticas económicas se va conformando la ideología del pueblo, particularmente en relación con el estado y la vanguardia.

En una revolución popular debería hacerse evidente lo que también ocurre, semi-oculto, en todas las sociedades: la política económica no es diseñada e implementada de manera neutral por los aparatos del estado, sino que hay una participación de determinados sectores y grupos organizados que son sujeto (y, eventualmente, destinatario fundamental) de esa política. El ejercicio de la política económica implica intervenir en la red de conflictos entre intereses particulares que constituyen la sociedad. Por ello, aun bajo la apariencia de mediador neutral, el estado ejerce fuerza, impone decisiones, fija límites a la acción privada, a la obtención de objetivos particulares. Y en ese sentido la imposición puede requerir el despliegue más o menos abierto, en el terreno directamente político, de los sectores sociales beneficiados. Las fuerzas populares, usualmente contestatarias, pero en este caso constituidas en la base social fundamental del proyecto revolucionario, deben organizarse entonces para participar en el planteamiento y la implementación de las políticas económicas. Pero, además, *la viabilidad de una política económica popular puede requerir la explicitación en la escena social de la correlación de fuerzas particulares que la sustentan, en el marco de las alianzas y equilibrios que la consolidación del poder revolucionario requiere.*⁶

El ejercicio de la política en el campo de la economía tiene una dimensión especial en el caso de las revoluciones en pequeños países de la periferia capitalista: el imperialismo tiene una enorme capacidad para atacar directamente el poder militar de la revolución, poniendo en cuestionamiento la estabilidad de la nueva correlación de fuerzas, e indirectamente (por la vía ideológica, por el boicot económico) de las bases de sustentación social del poder revolucionario. Así, por ejemplo, cuando se impone un embargo económico externo, la causalidad última de la penuria económica subsiguiente no es auto-evidente para todo la población (incluso algunos pueden atribuirle, en última instancia, a que la dirección política se ha “excedido” en su desafío al

⁶ Una claro ejemplo de esto es la reciente movilización de campesinos en Masaya por iniciativa del FSLN, que culminó con la expropiación de tierras privadas y su entrega a familias campesinas, cuando, de habérselo propuesto, el estado podría haber tomado directamente la decisión a partir de una petición escrita, o por iniciativa propia. Véase Marvin Ortega, “Tierra y lucha de clases (con énfasis en el caso de Masaya)”, ponencia presentada al IV Congreso Nicaragüense de Ciencias Sociales, Managua, agosto de 1985, mimeografiado.

coloso norteamericano). En todo caso, el estado revolucionario aparece como el mediador político del impacto socioeconómico de la acción externa. Aquí también, la política económica es un operador fundamental en la administración de ese impacto, debe responder no sólo a la agresión externa sino también al conflicto exacerbado de intereses contrapuestos en la sociedad nacional. Si se enfoca el diseño de la política exclusivamente en los efectos macroeconómicos, las consecuencias políticas pueden ser sorpresivas y de extraordinaria magnitud. Con eso cuenta, finalmente, el agresor externo.

LÓGICA ECONÓMICA Y LÓGICA POLÍTICA

Una vez destacado el componente político de la política económica, debemos realizar, con igual fuerza, un aspecto que la “sobrepolitización” de estos procesos puede llegar a ocultar:⁷ *la política económica también debe atender a leyes, condiciones y mecanismos específicamente económicos, cuya lógica no puede despreciarse por mucho tiempo sin afectar seriamente el mismo orden revolucionario.* Porque un componente fundamental del orden revolucionario es que el sistema económico –aún cuando esté en proceso de transformación– funcione con niveles de reproducción mínimamente aceptables (incluso dentro de la coyuntura impuesta por fuerzas externas). El sistema económico es el contexto que ubica y da sentido a las prácticas económicas de sus agentes, articulando o contraponiendo el interés privado con el nuevo interés social, y sería deseable que estimulara sistemáticamente las tendencias compatibles con el proyecto de nueva sociedad y desestimulara las retrógradas.

La cuestión de la lógica económica puede encararse en el nivel macrosocial, analizando los grandes balances de la economía y las contradicciones que implican.⁸ Sin embargo, a fin de establecer las vinculaciones con lo político, se requiere llevar el análisis al nivel de las fuerzas políticas y de su relación con las fuerzas sociales que están en su base, para lo cual es imprescindible integrar

⁷ Véase Samuel Lichtenztein, “Crisis, política económica y alternativas políticas”, en *América Latina 80: democracia y movimiento popular*, Lima, DESCO, 1981. En realidad, atender a la lógica económica es un imperativo político. Aunque resulta cómodo apelar a un “realismo” empirista, como el que justifica todo problema económico por la agresión imperialista, o el que reduce la causalidad social a un único proceso extra-económico (la guerra), es evidente que siguen operando las leyes económicas, sólo que sobreconformadas por otras causalidades. En esto, el papel de la teoría es fundamental para establecer los diversos órdenes y tipos de determinismo en cada coyuntura concreta. También es cierto que la teoría puede ser utilizada para justificar *ex post* y académicamente determinadas prácticas en el ejercicio del poder.

⁸ Para una explicación en ese sentido de la política económica planteada en Nicaragua en febrero de 1985, véase “Que no quede un solo nicaragüense sin ocupar su trinchera en la guerra del pueblo” (especialmente las exposiciones de funcionarios del estado), en *Barricada*, 8 de febrero de 1985.

conceptual y empíricamente la realidad de los agentes concretos de la sociedad y sus comportamientos.

En la teoría revolucionaria predomina el recurso a generalidades, a conceptos ampliamente abarcativos que no tienen un referente real evidente y directo, y se habla de los agentes como meros portadores de las estructuras. Pero, en la realidad, las “estructuras” que se pretende cambiar o desarrollar no tienen vida independiente, más allá o más acá de los sistemas de relaciones recurrentes entre agentes concretos de la sociedad. Cambiar estructuras es cambiar relaciones sociales, y éstas conllevan cambios en los comportamientos y en las conciencias individuales y colectivas de los agentes sociales. Pero además, estos agentes, en su concreción, son polivalentes, no asimilables ni siquiera en lo económico⁹ a una única categoría social, a una relación pura, exclusiva, que agote la definición de su identidad. Hablar de “burguesía” y “proletariado” –o, más específicamente, de “burguesía aldononera” y de “proletariado industrial”- en Nicaragua, es hablar de un conjunto de agentes de la producción que no están adscritos únicamente a la posición denotada por esa denominación. Ni el comportamiento económico del productor privado de algodón está determinado exclusivamente por esa función productiva, ni lo está el del proletario de una fábrica de Managua. ¿Cuáles son los límites empíricos entre el aldononero, el sorguero, el industrial o el comerciante formal, o bien, entre el trabajador industrial asalariado y el activo participante en la intermediación informal? Aunque las políticas económicas se diseñen apuntando a los personajes abstractos de la vida económica, éstas afectan concretamente a sujetos polivalentes y a unidades de reproducción con estrategias complejas, y el no considerar esta realidad provoca efectos “no buscados”.¹⁰

Esto es aplicable a cualquier país con una alta división del trabajo, es definitorio en una sociedad como la nicaraguense, donde las clases y los agentes no tienen una consistencia o un grado de cristalización equivalente al que suponen las teorías estructuralistas. La maleabilidad de esta sociedad es enorme. *Sus estructuras son “gelatinosas”, altamente inestables y vulnerables a cambios de las condiciones de su reproducción y, además, dispuestas a la movilidad con una vertiginosidad que desafía la capacidad de previsión de los*

⁹ No haremos referencia aquí a otras identidades que se salen del campo estrictamente económico (el género, la raza, la ideología política, las creencias míticas, etc.), que también tienen un determinismo importante sobre los comportamientos económicos ante una determinada política estatal, y que no pueden ser reducidos a una caracterización de clase. Sobre este tema, véase J.L. Coraggio, *Nicaragua: revolución y democracia*, op. cit., cap. 3.

¹⁰ Por ejemplo, es evidente que en Nicaragua no puede identificarse, en lo inmediato, la política salarial como instrumento dirigido a los sectores populares, ni la política hacia la intermediación como dirigida a sectores medios. El salario es un ingreso fundamental para los sectores medios, y los sectores más pobres de la sociedad participan activamente en la intermediación “informal”. El verdadero efecto de un ataque a la especulación y una revalorización del salario no puede captarse.....

*Estadistas.*¹¹ Sin en Nicaragua era posible hablar del escaso peso cuantitativo del proletariado como clase, ahora hay que hablar, además, de su escasa consistencia, de su carácter inorgánico y de la todavía inestable adscripción alcanzada por sus miembros hacia su identidad de clase.¹² Otro tanto puede decirse del campesinado pobre, que no sólo deja de ser campesino con facilidad (en su inserción productiva) sino que deja de ser “rural” y se urbaniza con entusiasmo, modificando drásticamente (y en principio de manera irreversible) su modo de vida. Estos trastrocamientos sociales no pueden dejar de tener sus efectos sobre las conciencias y las organizaciones y, por tanto, sobre el juego de fuerzas políticas. En efecto, así como las clases son gelatinosas, también lo son sus organizaciones corporativas, incluso las de mayor tradición de lucha –por limitada que ésta sea- como las del proletariado urbano. La tendencia reciente, por parte del proletariado y de los asalariados en general, a pasar de lleno a la intermediación informal o a ser sus apéndices, muestra con claridad que nada inherente a la clase asalariada la hace menos proclive a abandonar su posición en la división social del trabajo, que lo que ocurre con el campesinado que emigra a la ciudad. El interés económico inmediato prima en condiciones de difícil reproducción. El espíritu colectivo de la clase puede ser portado y desarrollado públicamente por el aparato de dirección sindical más que por la práctica de las bases, pudiendo darse una falsa sensación de permanencia e incluso de crecimiento. *La imposibilidad de defender los intereses inmediatos de la clase puede contribuir a esta tendencia a la desorganización.* Los imperativos de la defensa contra la agresión y del proyecto de unidad nacional bloquean a la clase para organizarse autónomamente y proseguir la lucha interna de clases al estilo tradicional, o incluso con variantes propias de la nueva coyuntura.¹³ Así,

¹¹ Sobre este tema y otros que pueden enriquecer futuros planteamientos sobre la transición, véase José Aricó, *Marx y América Latina*, México, Alianza, 1980.

¹² Véase Orlando Núñez, *Fuerzas clasistas de la revolución popular sandinista*, Managua, CIERA, 1983

¹³ El mismo concepto de “lucha de clases” queda cuestionado cuando las clases no se ajustan al modelo que supone ese concepto en la tradición marxista. Por supuesto que siempre puede imponerse el concepto a la realidad, pero valdría la pena hacer un esfuerzo por analizar más a fondo esta cuestión, por sus consecuencias en la relación teoría-práctica. Si la práctica revolucionaria en cada coyuntura está orientada por la teoría revolucionaria, y ésta apela predominantemente a categorías pensadas para establecer leyes cuya realización sólo se da en el gran movimiento histórico –en tanto leyes tendenciales-, las consecuencias pueden ser graves. Negar esta posibilidad desde una perspectiva dogmática sería poco saludable, en tanto el desajuste entre teoría y práctica revolucionaria finalmente conduce a una suerte de “improvisación ilustrada”. Conceptos más abarcativos, como el de “lucha social”, o una visión de las fuerzas sociales que comprenda identidades que escapan al esquema de una sociedad puramente dividida en clases, son una aproximación importante a ésta problemática. Sin embargo, queda por verse cómo se articulan esos análisis con las determinaciones –por incompletas que sean-, de clase, y las correspondientes contradicciones, en términos de la legalidad de los fenómenos sociales y sus tendencias. Sobre este tema, véase Orlando Núñez, *op. cit.*

El recurso usual de afirmar que, en esa coyuntura, la lucha de clases toma la forma de lucha antiimperialista, no ayuda analíticamente a comprender las contradicciones sociales ni a orientar

en situaciones de crisis extrema, la clase puede tender a la disgregación, en lugar de atrincherarse y consolidarse como clase obrera. Incluso, esta descomposición puede sobrevenir con métodos ilegales, legitimados sin embargo por su masividad y por la vasta red de “cómplices” que requieren las nuevas modalidades de supervivencia (la “lógica de las mayorías” opera aquí de manera regresiva o, en el mejor de los casos, como señal (¿?) estado de las contradicciones objetivas que debe encarar). *Sería paradójico que la revolución desatara un proceso que contribuya a disgregar sus clases fundamentales* –las únicas que irán hasta el final... Y, aunque ese proceso tuviera fundamentalmente determinantes objetivos, hay un margen resultante de políticas inadecuadas o de imperfectas modalidades de trabajo ideológico y político del estado y la vanguardia revolucionaria.

La crisis económica puede tener entonces la consecuencia de que las organizaciones de masas, imposibilitadas de crecer y consolidarse con base en la lucha por sus reivindicaciones específicas, se “vacíen” de sus bases. Y en esto la política económica desempeña un papel crucial, no sólo por sus efectos objetivos sobre las condiciones de reproducción de los diversos sectores sociales, sino por las condiciones “pedagógicas” de su implementación que, de no ser tenidas en cuenta, pueden implicar efectos alienantes sobre las bases y su voluntad política.

Entonces, economía y política se interpenetran, se necesitan: la política económica (es decir, las políticas del estado que inciden sobre las bases materiales de la sociedad) es componente fundamental de la política, de la construcción del poder revolucionario, del poder popular. Separar –en el pensamiento táctico y estratégico- economía y política, sería precipitar a la revolución en una dialéctica disolvente.

Si, además, la reorganización de la economía se va a llevar a cabo con el *consenso* de los involucrados por esos cambios, esto implica utilizar tácticamente la política económica, para ir determinando los ritmos posibles de desarrollo y/o transformación de las identidades que la revolución propugna y de aquéllas que quiere desalentar. Pero este proceso debe regirse por una estrategia global de transformación, so pena de obtener resultados contraproducentes.

La transformación social, política e ideológica de una sociedad implica organizar y construir, pero también desorganizar y destruir, y ese proceso puede ser dirigido conscientemente, en base al conocimiento científico sobre los procesos intervenidos. De lo contrario, la política económica en un contexto de crisis puede no sólo debilitar las clases que se consideran soportes sociales fundamentales de la revolución, sino también –simultáneamente- reinstalar formas de producción que se consideraban perimidas por decreto. Por ejemplo,

la práctica específica de los distintos agentes sociales en el proceso revolucionario, en tanto todo tiende a reducirse a una única contradicción principal, mecanismo que impide realizar un “análisis concreto de la realidad concreta”.

la mediería, el colonato, etc., pueden resurgir como parte de las estrategias reproductivas articuladas de los productores burgueses, del campesinado pobre y de pequeños y medianos productores agrarios. Y estas relaciones de producción están históricamente asociadas a relaciones inter-personales en el plano local, que se presentan para la manipulación político-ideológica de partidos no revolucionarios.

Por el lado del trabajador rural sin tierra, en una economía inflacionaria (en la que se pretende contener los salarios y en la que los abastecimientos básicos son atraídos por quienes pagan mayores precios en mercados paralelos), la mejor y más segura utilización de su fuerza de trabajo es la que permite comandar *directamente* productos para el autoconsumo o para su venta en el mercado. Se da un fenómeno parecido al pago en especies, que para los trabajadores fabriles no es equivalente a un salario monetario si tienen expectativas inflacionarias y prevén que los salarios quedarán rezagados respecto de los precios. Otro efecto no deseado –por falta de una estrategia global que vaya planteando alternativas cuando destruye formas existentes– puede provocarse cuando el estado se propone controlar aceleradamente la economía, e incentivar modalidades de producción y circulación “formales”, especializadas, para facilitar dicho control. Esto puede implicar contradecir las estrategias de sobrevivencia de sectores populares y medios de la sociedad, sin ofrecerles simultáneamente una posibilidad “formal” efectiva. De hecho, la caracterización ideológica y política de “los especuladores” como improductivos, antisociales, etc., puede abarcar amplios sectores populares que atraviesan el sistema de clases, y al no ir acompañada de alternativas suficientes de reinserción productiva en términos aceptables para dichos sectores (reacios, por ejemplo, a regresar al campo o a un trabajo asalariado mal remunerado), puede provocar efectos ideológicos no deseados.¹⁴

Si estas contradicciones son objetivas y no pueden ser resueltas a voluntad, el imperativo político de las luchas centrales que encara la revolución y/o el imperativo económico global, pueden hacer *necesario* tomar decisiones que afectan negativamente a sectores que conforman la base social de la revolución

¹⁴ En esto debería tenerse en cuenta otra dimensión del denominado “sector informal” de intermediación: su carácter de mecanismo de redistribución desde los sectores de mayor a los de menor ingreso. Sin embargo, su carácter improductivo es claro. Pero la escasez, que está en la base de la especulación, no puede ser atribuida a la existencia del sector informal, sino a limitaciones de la producción o a un erróneo manejo de los incentivos al trabajo productivo. La revolución sandinista enfrenta en 1985 una situación de la que esta problemática planteada es ejemplo claro: el plan de reordenamiento del Mercado Oriental de Managua. Surgido luego del terremoto de 1972, abarca entre 20 y 30 mil agentes de intermediación, “localizados” en unas 20 hectáreas. Reducirlo drásticamente a unos 10 mil comerciantes formales, sin tener programas alternativos para el resto, teniendo en cuenta que es el eje de una red de relaciones especulativas que llega hasta diversas regiones productoras del país, y que se ha convertido en un foco privilegiado de acción ideológica de la iglesia jerárquica y de sectas religiosas, hace de este asunto un verdadero *jest* para el proyecto de unidad nacional en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país.

o que entran en sus alianzas fundamentales. Sin embargo, la ausencia de un marco estratégico y de un sistema analítico integrador de las diversas políticas estatales puede propiciar decisiones ineficaces, precipitando fenómenos no esperados que agravan la situación, y trayendo un “costo político” innecesario para la revolución.

ALGUNOS PROBLEMAS EN EL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

En su exposición acerca de la rectificación de la política económica emprendida en febrero de 1984,¹⁵ el comandante Wheelock hizo mención a una “cuarta causa” determinante de esa drástica revisión de las políticas del Estado. En efecto, a las tres causas ya reconocidas (la herencia somocista, la crisis internacional y la agresión externa), se agregaba ahora los errores cometidos en la gestión económica desde el triunfo revolucionario. Esto abre la posibilidad de evaluar los costos de dichos errores, tanto en términos económicos como políticos, así como las razones de su gestación. En lo que sigue plantearemos algunas hipótesis sobre los factores que pueden haber contribuido a dicha gestación.

La fragmentación del estado

Un aspecto de la herencia somocista es el de haber dejado como punto de partida para la construcción del estado revolucionario los restos de un estado atrasado, corrupto, con un escaso desarrollo de las instituciones y de los instrumentos que usualmente sustentan una política económica. Las reformas que se hicieron al organigrama estatal no pudieron superar una característica crucial: su división en esferas de decisión no corresponde a los subsistemas de relaciones concretas que constituyen el funcionamiento orgánico de la economía. Las unidades ministeriales, base de ese organigrama, responden a prácticas estatales inspiradas en una tradición latinoamericana basada, a su vez, en teorías de la política económica poco aptas para un proceso

¹⁵ Véase “Medidas económicas forman parte de la defensa de la Patria”, transcripción de la exposición del comandante Jaime Wheelock R., en *Barricada*, 13 de febrero de 1985. Wheelock afirmó: “Hay un cuarto factor constituido en su conjunto por las diferentes acciones de política económica... que en todo su conjunto también han incidido, de un modo u otro, a ser causa de fenómenos que debemos corregir... Estas políticas, con todo lo bien orientadas que estaban, han producido efectos colaterales también negativos, sobre los cuales también debemos actuar”. Para un primer análisis y presentación de las medidas, véase: Roberto Pizarro, “La nueva política económica: un reajuste necesario”, Managua, marzo de 1985, mimeografiado.

revolucionario (separación entre producción y circulación, entre lo real y lo monetario, entre distintas esferas de la producción según sectores o ramas entre las finanzas estatales y todo lo demás, etc.).

Cualquier conjunto encadenado de actividades de producción y circulación (por ejemplo: desde la importación de agroquímicos hasta la exportación de algodón y la producción de textiles) queda bajo la influencia de numerosos ministerios y agencias estatales, cada una de las cuales tiende a tener una lógica institucional propia, atendiendo a objetivos específicos. Así, el Ministerio de Comercio Interior (MICOIN) fija precios al consumidor, atendiendo a objetivos del consumo y la distribución; el Ministerio de Desarrollo y Reforma Agraria (MIDINRA) o el Ministerio de Industria (MININD) fija precios al productor, atendiendo a objetivos de la producción; el Banco Central fija tasas de interés o tipos de cambio atendiendo a una política crediticia y monetaria; el Ministerio de Finanzas (MINFIN) fija estructuras impositivas atendiendo a los balances presupuestarios, etc. Si cada situación concreta se encara con un conjunto de decisiones aisladas tomadas con base en objetivos y criterios sectoriales o institucionales, no existe garantía de coherencia para el conjunto de intervenciones. En tal sentido, surge inmediatamente la necesidad de la coordinación, o de la dirección unificadora e integradora de criterios, siendo el Ministerio de Planificación (MIPLAN) el encargado de esa integración creando un marco de planificación.¹⁶ También se crearon programas especiales, como el Programa Alimentario Nacional (PAN), que debía coordinar acciones de varias agencias alrededor de una problemática integradora: la producción y distribución de productos básicos, en particular de granos básicos.¹⁷

¹⁶ A fines de 1979, al hacerse cargo del Ministerio de Planificación el comandante Henry Ruiz, se hizo evidente la decisión de hacer de la planificación una actividad central del estado. Los programas anuales de 1980 (*Programas de reactivación económica en beneficio del pueblo*, Managua, 1980) y 1981 (*Programa económico de austeridad y eficiencia*, Managua, 1981) formalizaron en documentos esa intención. Posteriormente siguieron elaborándose documentos anuales, pero su circulación fue restringida. En cualquier caso, la existencia de documentos no equivale a la existencia de un proceso de planificación central de la economía. De hecho, el sistema financiero fue asumiendo crecientemente funciones de regulación y control, a través de las comisiones de asignación de divisas y de la política monetaria y crediticia. Aunque no se logró totalmente, el sistema financiero pasó a ser la institución con más atribuciones sustantivas para controlar a las empresas del área propiedad del pueblo (APP). En enero de 1985, y como anticipación institucional a la rectificación en la política económica, el Ministerio de Planificación (Miplan) pasó a ser una Secretaría de Planificación dependiente directamente de la Presidencia de la República. Véase *Barricada*, 8 de enero de 1985.

¹⁷ Al crearse el PAN se declaraba como uno de sus objetivos el de “organizar un sistema único de dirección, ejecución y control de los procesos de producción y abastecimiento de alimentos básicos a partir de las instituciones del estado involucradas en ello, logrando conducir una estrategia conjunta, mediante la compatibilización de políticas relacionadas con la ejecución del programa”. Véase “Programa prioritario de la revolución, Programa Alimentario Nacional (PAN)”, Managua, mayo de 1981, mimeografiado.

En general, la multiplicación de comités de coordinación¹⁸ no logró resolver la cuestión de la dirección unificada de la economía. De hecho, para tomar una variable, los diversos precios, que deberían responder a una lógica integral de subsistema, eran fijados en momentos y con criterios diversos, afectando la lógica productiva pero, al mismo tiempo, generando condiciones para comportamientos especulativos,¹⁹ desatando consecuencias tales como el crecimiento incontrolable de los subsidios²⁰ y la subsiguiente emisión monetaria,²¹ creando la ilusión a los agentes económicos de que podrían demandar en los mercados productos nacionales e importados en cantidades muy superiores a las efectivamente disponibles. La presión sobre la balanza de pagos se acentuó, así, más allá de las presiones objetivas derivadas del modelo productivo heredado, del deterioro en los términos del intercambio y de los costos de la agresión externa. Ya en 1984 era evidente que la pretensión de evitar la inflación era imposible de lograr incluso a costa de mantener los salarios monetarios congelados. En 1983 había habido una larga discusión sobre esta cuestión, a la que finalmente se puso fin resolviendo que la

¹⁸ Un ejemplo fueron los Comités de Programación y Coordinación sectoriales, creados por Miplan, que no pudieron vencer la fuerte inercia institucionalista de cada ministerio o área de decisión estatal involucrados. De hecho, la práctica misma de la planificación contribuía a su escasa legitimidad: metas “bajadas” de manera considerada arbitraria por las agencias que las recibían, pedidos de información cuyo uso y destino no estaban claros e insumía esfuerzos que se prefería dedicar a la actividad propia de cada instancia, etc. Todo esto no resta importancia ni responsabilidad a Miplan en la gestión de la economía, en tanto participaba en todas las instancias formales de coordinación de la política económica, y su opinión tenía el respaldo de un comandante de la revolución, miembro de la dirección nacional del FSLN.

¹⁹ En 1981 se mencionaba el caso de una empresa del APP que se dedicaba a la ganadería y, a tal fin, producía sorgo para alimentar el ganado. Pero al estar el precio al consumidor por debajo del precio al productor (y la diferencia cubierta por un subsidio a la agencia estatal de comercialización), dicha empresa prefería vender su producción de sorgo y volver a comprarla, haciendo una diferencia especulativa que, además, implicaba mayores costos sociales de transporte, almacenamiento, administración, etc. Debe tenerse presente que la conformación del APP a partir del conjunto caótico de empresas confiscadas al somocismo implicaba una tarea ciclópea de poner a producir de inmediato recursos dispersos de unidades descapitalizadas, y a la vez organizar empresas casi desde la nada. Sólo avanzar en un sistema de registración común tuvo marchas y contramarchas que impedían un sistema de control eficiente por parte de instancias ministeriales. No es extraño que se haya visto en el sistema bancario la mejor opción para el control financiero a partir de los programas de producción que constituían la base de la asignación del crédito.

²⁰ Los porcentajes de la partida de subsidios al consumidor respecto al déficit fiscal fueron de 18.9% (1981), 27.2% (1982) y 13.4% (1983). En 1984 se decidió comenzar a reducir los subsidios, empezando por los granos básicos. En febrero de 1985 se decidió eliminar totalmente los subsidios a los productos de consumo, pero la evolución posterior de los precios y costos hizo reaparecer la necesidad de continuar subsidiando algunos productos. Véase Frederic Dévé y Philippe Grenier, *Precios y subsidios de los granos básicos en Nicaragua*, Midinra/PAN, Managua, mayo de 1984.

²¹ Más del 70% del déficit fiscal era cubierto, en 1984, por la emisión monetaria. Los topes de cartera impuestos a los bancos del sistema financiero tampoco eran efectivos en tanto acudían al Banco Central para aumentar los fondos disponibles.

emergencia militar exigía controlar las demandas salariales para evitar un descontrol de la economía que podía afectar la defensa.²²

Pero los precios, fijados para responder a aumentos en los costos o a presiones ejercidas por diversos grupos productivos, privados o del APP,²³ eran vistos caso por caso, provocando no sólo las distorsiones arriba mencionadas a lo largo de una cadena de producción y circulación, sino también las derivadas de unos precios relativos que no respondían en su conjunto a las prioridades de producción y a la disponibilidad efectiva de recursos del país. Los márgenes de ganancia que se fijaban *para cada rubro* en negociaciones particulares, no tenían tampoco en cuenta las estrategias decisionales de los productores polivalentes, quienes podían preferir optar por productos con menor riesgo, con una mayor velocidad de rotación del capital (sorgo mejor que algodón) y con una menor inversión por Córdoba ganado. En otros términos, no es la tasa de ganancia sino un margen sobre costos variables lo que se ha utilizado (y todavía predomina) como base para el cálculo de los precios al productor, dando lugar a tasas implícitas de ganancia con enormes diferenciales que son las que *tienden* a orientar las decisiones privadas.²⁴ El precio de los productos importados, resultante de un tipo de cambio que no reflejaba el costo real de las divisas para el país, incentivó el consumo suntuario y la sobre-inversión durante un período de tiempo. En general, el cálculo económico era relegado como criterio de decisión (muchas veces considerando “economicistas” a quienes planteaban su necesidad), a la vez que, contradictoriamente, se pretendía avanzar en un sistema de planificación central. Como resultado, y a medida que las fijaciones

²² Véase *Barricada*, 21 de diciembre de 1983. El 25 de octubre los Estados Unidos habían invadido Granada y en Nicaragua se vivía como inminente la posibilidad de una invasión.

²³ La problemática de los precios al productor no puede entenderse en Nicaragua si se la ve sólo como una contradicción entre los objetivos planteados por el estado (como regulador de la economía) y los intereses privados. En ciertos casos, la presión de las mismas empresas estatales para enjugar sus déficit con aumentos de precios fueron causa no sólo de tales incrementos sino de la transferencia de ganancias extraordinarias a empresas privadas más eficientes de la misma rama, como fue el caso del azúcar.

²⁴ Para el ciclo 1981-1982, calculamos las siguientes tasas equivalentes anuales de rentabilidad sobre capital variable invertido: algodón, 24%; caña de azúcar, 52%; ajonjolí, 192%; sorgo, 244% (todos los cálculos para rendimientos medios). En general, podríamos afirmar que el interés de la burguesía ha sido tomado en consideración de manera continua por el gobierno revolucionario. El problema es que los análisis de costos y ganancias, de la estructura del capital, etc., que debían sustentar las definiciones concretas, eran inexistentes y, por otro lado, se consideraban de hecho innecesarios por parte de muchos agentes del estado que preferían basarse en su “propia experiencia”. El empirismo predominó, y la ausencia de teoría económica elemental fue norma en muchas esferas de decisión gubernamental. Fenómenos como la renta diferencial, básica para entender la configuración de intereses en el sector agrario, eran ignorados y se fijaban los precios con base en promedios, en todo caso estimados. El estado pretendió abolir la renta, al fijar precios uniformes y muy bajos por el arriendo de tierras, con lo que en realidad transfirió rentas de unos agentes a otros y anuló uno de los mecanismos de asignación racional de recursos, sin sustituirlos por una nueva racionalidad eficaz y eficiente. En una economía de base agraria, el ordenamiento territorial del sector agropecuario no se constituyó, como hubiera debido, en instrumento de la nueva racionalidad.

parciales de precios iban trastocando la lógica del sistema de asignación de recursos, los precios de mercado comenzaron a escindirse en “oficial” y “paralelo”, ninguno de los cuales respondía a las verdaderas condiciones de la economía.

Pero esta duplicidad, convertida en permanente, generó unas oportunidades de ingreso fácil con sólo acceder a pequeñas cantidades de productos al precio oficial y revenderlas a los comerciantes del mercado paralelo. Estos ingresos fácilmente duplicaban o triplicaban los salarios de un trabajador. La emigración de campesinos a Managua (y de obreros y artesanos fuera de su actividad productiva) fue, en parte, efecto de este manejo de los precios. El contrabando se incentivó por las mismas razones. Como resultado, la producción se desalentó y surgió una nueva capa de especuladores enriquecidos, articulados con una vasta red de pequeños especuladores que alimentaban esa actividad.

La corrupción proliferó, entre funcionarios estatales y aun en organizaciones de masas involucradas en el abastecimiento. El proceso electoral de 1984 posiblemente demoró las medidas que la revolución comenzó a implementar desde fines de 1984, pero en febrero de 1985 la gravedad de la situación iba a dramatizarse por la magnitud de los cambios introducidos.

¿Por qué se mantuvo una situación de descoordinación en el diseño y en la implementación de las políticas económicas estatales? La falta de instancias *aceptadas* de coordinación fue un factor relevante, que hubiera podido paralizar al estado, haciendo predominar un efecto de “espera”, hasta que las instancias específicamente políticas tomaran decisión o “bajaran líneas”. *En realidad, predominó el ejercicio del poder (desigual) de cada esfera de decisión, asignando recursos o tomando medidas sin tener en consideración los balances macroeconómicos o las necesidades de otras esferas estatales. El resultado de conjunto fue el exceso de demandas sobre la economía, una especie de “voluntarismo colectivo” que constituye uno de los problemas fundamentales que orientan la reciente rectificación de la política económica,²⁵ que admite finalmente los límites objetivos de la economía.*

²⁵ Los condicionantes objetivos de la crisis económica actual en Nicaragua son innegables: el país –con una alta tasa de crecimiento demográfico, fenómeno usualmente no tenido en cuenta– debe trabajar el doble para obtener en el mercado internacional lo que compraba hace 10 años. Al deterioro en los *términos de intercambio* se agregan los crecientes costos directos e indirectos de la *defensa*. (En 1985, el 50% del presupuesto está dedicado a ese rubro) Pero en este trabajo, *sin minimizar los factores mencionados, que son la causa fundamental de la escasez*, debemos centrarnos en los factores subjetivos derivados de una incorrecta política económica, porque la vinculación entre economía y política requiere hacer ese análisis para determinar los márgenes de acción del estado, aún en la situación de crisis, y establecer las consecuencias sociales, políticas e ideológicas que puede acarrear una mala utilización de esos márgenes. La rectificación de febrero de 1985 indica, por sí sola, los errores advertidos que ahora se intenta corregir: anulación de los subsidios al consumo, devaluación de la moneda (manteniendo un sistema de cambios múltiples) y legalización del mercado paralelo de divisas; reajustes salariales encaminados a mantener el poder adquisitivo del salario a niveles de 1984, vinculando crecientemente salario y productividad; limitación al gasto público en servicios sociales; reforma impositiva para reducir déficit y gravar rentas de sectores informales; incremento en las tasas de

La ausencia de una estrategia operativa

Sin embargo, cada esfera de decisión afirmaba e intentaba responder a los lineamientos políticos del proyecto revolucionario, interpretando dichos lineamiento según su óptica sectorial o institucional. Aquí podría adelantarse otra hipótesis: *se generó un vacío de dirección difícil de llenar con reuniones de coordinación, orientadas a resolver problemas puntuales por la falta de una estrategia económica global, enmarcada en una estrategia política*, que cumpliera con dos condiciones fundamentales: a) vincular de manera visible y lógica los principios básicos que orientan el accionar revolucionario con los objetivos y modos de acción correspondientes a cada esfera de acción del estado, y b) ser conocida y asumida por los responsables de diferentes niveles en las diversas esferas de decisión.

Hay varias causas para este vacío, que permitía el accionar discrecional y fragmentado de las distintas agencias estatales. En primer lugar, para advertir la necesidad misma de una estrategia de este tipo, es condición tener una *concepción teórica de la sociedad y de los procesos de transformación que supere las macro-visiones del movimiento histórico* y que integre el conocimiento científico acumulado en América Latina acerca de fenómenos que se dan también en Nicaragua (las teorías sobre la economía campesina, sobre el denominado “sector informal”, pero también sobre el funcionamiento del mercado, etc.). Sin esto no es posible establecer las mediaciones entre las grandes tareas del proyecto histórico de clase y las tareas coyunturales específicas de la revolución en su etapa actual. Otra es la misma *distribución de*

interés (siguieron siendo altamente negativas, en todo caso); sostenimiento de la rentabilidad empresarial mediante una política de ajuste de precios a los costos más un margen de ganancia; encarecimiento, vía tasa de cambio e impuestos, de los bienes importados, particularmente de los bienes de producción; canalización de productos de primera necesidad con prioridad hacia el campesinado y los trabajadores asalariados en ramas “productivas”. Pero este paquete de medidas, acompañado de un plan restringido de inversión y de otras medidas para incentivar la productividad y racionalización de la asignación de recursos escasos (acelerado por el posterior embargo económico impuesto por el gobierno norteamericano en mayo de 1985) enfrenta dificultades para obtener resultados rápidos, aunque las medidas fueran en la dirección correcta. Por lo tanto, para 1985 se pronosticaba una inflación de entre 65% y 80%, y ya se ha revisado esa cifra en agosto del mismo año, a una superior al 200% anual. Por lo demás, y mientras el córdoba sigue subvaluado, el mantenimiento de un mercado paralelo de divisas a una tasa 12 veces superior a la máxima tasa oficial genera tensiones adicionales hacia la dolarización de la economía, que el mismo gobierno acompaña al dar incentivos en dólares a los exportadores que sobrepasan determinadas metas de producción. Los precios relativos, hasta el momento, siguen sin ser explícitamente considerados en la política de precios. Otros problemas subsisten por las dificultades para modificar sistemas de abastecimiento y administración estatal. Lo real es que, en lo inmediato, las medidas afectan a sectores populares, para los cuales el salario es solamente una de las fuentes de ingreso, y no la más importante. La presión para sobrevivir en los “intersticios” del sistema económico formal no sólo no se ha disminuido sino que posiblemente ha aumentado. Otros lineamientos nuevos incluyen una *efectiva* aceleración de la entrega de tierras a campesinos individuales, y una esperada presión sobre las empresas estatales para incrementar su eficiencia económica.

poder entre esferas del estado, que permite la ejecución de proyectos y la presentación de hechos consumados que arrastran al resto de la gestión estatal tras una lógica generada sectorialmente. Otro factor fundamental ha sido la herencia de un *desconocimiento empírico sobre la realidad social al momento del triunfo*. El difícil ejercicio de las ciencias sociales bajo el somocismo supuso una ausencia de estudios que generaran un conocimiento empírico riguroso. Claro ejemplo de esto fue la sobrestimación de las propiedades confiscadas al somocismo durante los primeros meses del gobierno revolucionario, así como la serie de estimaciones (nunca verificadas) acerca de la conformación y peso relativo de las diversas clases, capas y fracciones sociales, particularmente en el campo. Pero un factor fundamental que, sin duda, ha contribuido a frenar la posibilidad de desarrollar una estrategia como la planteada, ha sido *la agresión contrarrevolucionaria*. La situación de guerra provoca una tendencia a considerar como información estratégicamente importante para el enemigo datos que hacen al funcionamiento de la economía. En consecuencia, *la socialización de la información, de los programas y proyectos, de las proyecciones, de los resultados de la actividad económica, se bloquea por el imperativo de la defensa*. Esta disyuntiva –socializar la información para lograr una mayor integración de las decisiones particulares públicas y privadas, o bien mantener dentro de círculos restringidos la información globalizante, transmitiendo sólo líneas generales o bien tareas muy específicas- es de algún modo análoga a la que enfrenta una organización revolucionaria cuando lucha contra el poder dominante.²⁶

Por lo demás, una estrategia no analítica y desconocida no permite incorporar criterios tales como el costo de oportunidad (lo que es necesario dejar de hacer, o los intereses que es necesario afectar si se toma determinada decisión), ni permite incorporar una parte fundamental del conocimiento empírico generado por la misma práctica revolucionaria, que no ha sido sistematizado y escrito. Pero, además, impide lograr una participación de la sociedad en su discusión, condición esencial, en algunos casos, para poder asumir como propia la estrategia y atenerse a sus dictados y consecuencias. La alienación que provoca el estar sujeto a virajes (muchas veces bruscos) de la economía, puede tener un efecto desalentador sobre el esfuerzo productivo y su racionalización de acuerdo con el interés general. Un marco estratégico conocido ayudaría a dar sentido a esos virajes, cuando no incluso a anticiparlos.

²⁶ Al referirse a la conveniencia de expresar los objetivos revolucionarios, Carlos Fonseca decía: “Pero por otro lado están los que de buena fe piensan que conviene ocultar los propósitos revolucionarios, que con ello se favorece a la revolución. La experiencia nos da pruebas para rebatir este punto de vista [...] Para que triunfe la lucha contra la dictadura somocista, se hace indispensable el apoyo del pueblo, lo cual es prácticamente imposible de lograr si ocultamos nuestros anhelos a favor del campesinado y por el cumplimiento de una reforma agraria revolucionaria”, en Carlos Fonseca, *Obras*, tomo I, “Bajo la bandera del sandinismo”, Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1982, pp. 35-36.

En este punto es necesario incorporar una consideración adicional. No es suficiente con tener claro el panorama y visualizar cuál sería una política correcta. La instrumentación requiere otras condiciones subjetivas que, hasta tanto no se cumplan, pueden bloquear la rectificación de la política económica. Eso puede requerir la superación de algunos problemas –como el arriba mencionado de la fragmentación del estado- o bien *completar un proceso de discusión colectiva cuya lógica y ritmo no son económicos sino políticos, hasta que la nueva política sea asumida por el estado en su conjunto.*²⁷

La centralidad del estado en el proceso de transformación

La sociedad nicaragüense se caracterizaba, al momento del triunfo revolucionario, por un débil desarrollo de su sociedad civil. Con ese punto de partida, no era difícil pensar que las transformaciones fundamentales en la sociedad y, en particular, las económicas, debían ser comandadas e instrumentadas desde el estado. Pero la práctica mostró que también el estado heredado estaba atrasado, y que la inercia de ese atraso iba a ser muy fuerte. El “feudalismo institucional” al que suele hacerse referencia, el burocratismo y las tendencias a la corrupción de agentes del estado, no desaparecieron con el triunfo, y se dio una permanente tendencia a reproducir e incluso extender esos comportamientos, tendencia contra la cual luchó y lucha la dirección política revolucionaria. Pero ¿en qué medida, y con qué plazos, la transformación revolucionaria del estado podría ser llevada a cabo exclusivamente desde la vanguardia política? *Si revolucionar el estado implica revolucionar estructuras de poder, para acelerar ese proceso se requiere la acción de fuerzas políticas y sociales organizadas con el propósito de democratizar la sociedad, de constituirse en sujetos de la revolución. Y dichas fuerzas están enraizadas en la sociedad civil misma. En esto, la articulación consciente entre partido revolucionario, estado y organizaciones de masas es fundamental.*²⁸

²⁷ De hecho, ya en 1982-1983 se tenía suficiente conocimiento sobre la necesidad de replantear el enfoque de la política económica. Esto está reflejado claramente en el documento: “Lineamientos de política económica del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua” (1983-1988), que fuera ampliamente difundido dentro y fuera del país en 1983. Dicho documento proponía bajar las metas de crecimiento económico y modificar la política para lograr un ajuste financiero en una línea muy similar a la finalmente adoptada en 1985. En el período intermedio de 2 años, las contradicciones de la economía se agudizaron y las nuevas medidas debieron asumir prácticamente el carácter de una política de *shock*.

²⁸ Aunque pueden plantearse esquemas ideales de esta relación, lo real es que en un país pequeño, periférico, atrasado, la falta de cuadros con capacidad profesional y técnica o con suficiente claridad política es una limitación importante. El partido revolucionario tiende a ocupar las posiciones principales tanto de los aparatos de estado como de las incipientes organizaciones de masas, en un esfuerzo por dar unidad política al accionar revolucionario. Pero esto, a su vez, dificulta que el partido se erija en crítico de la gestión administrativa del estado, en tanto la crítica puede afectar posiciones de poder dentro del mismo partido. En tanto las organizaciones de masas tampoco puedan desarrollarse autónomamente, con sus propios

Por otro lado, la limitada capacidad del estado para asumir todas las tareas que plantea la revolución hace que –de no modificarse la visión que le atribuye la iniciativa y la dirección de las transformaciones- necesariamente muchas tareas se posterguen, a la vez que la creatividad popular queda subutilizada. De hecho, esto tiene que ver con la concepción misma del poder. Si se ve el poder como algo ya dado, que ha sido “tomado” y que puede ser distribuido o bien centralizado –de manera que todo poder otorgado a una instancia de la sociedad es “extraído” de otra- no se advierte que el poder social se regenera y amplía con el desarrollo mismo de la sociedad. La revolución, de hecho, crea nuevas fuentes y posibilidades de ejercicio del poder. *En un proyecto revolucionario como el sandinista, para el cual el poder y la hegemonía popular son constitutivos, se abre una posibilidad ilimitada de crear ámbitos de ejercicio del poder popular que no sólo no compiten con el poder estatal sino que lo potencian dentro de un proyecto común de consolidación revolucionaria.* Es más, en un proceso de transformación social orientado por los objetivos de socialización efectiva del poder y la economía, el estado no puede “adelantarse” siempre y en todos los campos a la sociedad civil, y la relación entre ambos debe definirse en cada campo específico, según las circunstancias. Tal como ha sido propósito manifiesto de la conducción revolucionaria, una política económica a favor del proyecto popular debe contar, en su diseño e instrumentación, no sólo con los aparatos estatales como un todo coherente, sino con las organizaciones de masas, desde el momento mismo del diagnóstico de la situación hasta la instrumentación y seguimiento. Pero esto no es fácil, y requiere una comunicación y una relación especial entre el estado y la dirección de las organizaciones de masas, a la vez que entre esta dirección y las masas mismas.

Las limitaciones a la lucha de clases

Ante la agresión imperialista, la revolución nicaragüense requiere, para su sostenimiento, *poner la economía en función de a] la defensa y de b] la reproducción elemental de la población, pero a la vez c] considerar los intereses materiales que sustentan la unidad nacional.* Esto implica contradicciones políticas de resolución extremadamente difícil.

intelectuales orgánicos, quedarán asimismo bloqueadas para efectuar la crítica, con la tensión adicional de que sus bases pueden comenzar a sentirse no representadas en sus reivindicaciones inmediatas. Si la formación de cuadros técnico-políticos es, entonces, una tarea prioritaria, se plantea el problema de qué contenido debe tener esa formación. Y en esto desempeña un papel negativo la falta de una sistematización de experiencias de transición que supere los manuales, centrados en la denominada “teoría del socialismo”, poco adecuada para guiar la acción en esta etapa de las revoluciones. De hecho, para el caso y la temática que analizamos, la experiencia de la Unidad Popular en Chile es tanto o más relevante que la de procesos calificados como socialistas. Véase Sergio Bitar, *Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena*, México, Siglo XXI, 1979.

Desde un comienzo, la dirección revolucionaria se propuso crear un orden revolucionario, que fuera el contexto dentro del cual se hiciera efectivo el proyecto de unidad nacional, condición además para sostener la lucha que sería necesario continuar contra la agresión imperialista. Ello implicó *frenar la lucha de clases en sus formas tradicionales o en las formas que ahora facilitaba la derrota de la guardia nacional*. Fueron frenadas las tomas de tierras y lugares de trabajo, las huelgas por reivindicaciones económicas imposibles de ser sostenidas por el FSLN, más que fuerzas reivindicativas, pasaron a ser seguidoras, cuando no implementadoras, de los lineamientos bajados desde la conducción revolucionaria y el estado, en contradicción parcial con la concepción materialista del cambio social asumida en el discurso revolucionario.²⁹

Esto ha tenido dos efectos: por un lado, la organización de las masas pasó a depender de la capacidad de movilización y de acceso a recursos estatales de sus cúpulas, así como de la propaganda, más que del desarrollo mismo de la lucha de clases. Si la acumulación y el sostenimiento de fuerzas se hace mediante el enfrentamiento contra adversarios de clase “visibles”, logrando

²⁹ En un significativo editorial, el FSLN se expresaba oficialmente de la siguiente manera en agosto de 1979: “Derrotada la dictadura, y habiendo tomado el poder político las fuerzas que participaron en su derrocamiento, se hace obligatorio asumir ahora la realización del programa que unió a todas estas fuerzas. Programa que tiene sus raíces en la situación objetiva que le dio origen y que sólo cumpliéndolo es posible entrar después en una nueva fase del desarrollo social. En este sentido, el programa del Gobierno de Reconstrucción Nacional... es... el programa más revolucionario que puede aplicarse hoy en nuestro país. Posiciones que vayan más abajo de él son reaccionarias, y posiciones más allá de él, tienden a desembocar en el ultraizquierdismo... Saltar etapas significa poner inmediatamente en peligro la revolución, significa el peligro de provocar el boicot económico primero y la intervención armada imperialista después, y más aún, significa lanzarse a la aventura de realizar determinadas tareas *sin contar con una base material adecuada y con la suficiente fortaleza de las fuerzas sociales que están llamadas a impulsarlas*”, en *Barricada*, 8 de agosto de 1979 (las cursivas son nuestras).

La referencia a “fases” o “etapas” que en múltiples oportunidades ha hecho el FSLN, es interpretada por los sectores más politizados de la burguesía como que su destino está sellado, y que la economía mixta no es más que un recurso táctico del FSLN. Más allá de que alguna vez pueda haber sido pensado así, el desarrollo real del proceso revolucionario va indicando otro contenido para esa referencia a etapas, más asociadas a la superación del atraso que a la extinción de la propiedad capitalista. El comandante Víctor Tirado López ha dicho: “...Me preguntan si la empresa privada va a sobrevivir en Nicaragua... Es un proyecto estratégico, no una maniobra táctica [la economía mixta]... se trata de una emulación para ver quién es más eficiente, más productivo, y quién resuelve problemas sociales. Entonces, las empresas que eleven su eficiencia, su productividad, y contribuyan a solucionar los problemas del atraso, de la pobreza, de la ignorancia, son las que van a sobrevivir, independientemente de si son empresas públicas o privadas.” (Transcripción de la intervención del comandante Tirado de la Casa “José Benito Escobar”, el 25 de febrero de 1985.)

Cabe destacar también que en ese editorial de 1979, el FSLN advertía la necesidad de fortalecer *fuerzas sociales* como condición para impulsar las transformaciones, no abrogándose la exclusividad de esas fuerzas como partido. La dialéctica relación entre organización/lucha/capacidad de realizar transformaciones, es un eje central para analizar el devenir de la revolución en estos 6 años y los que vendrán.

reivindicaciones a partir de la lucha y el desarrollo de tácticas específicas, las organizaciones de masa iban a crecer sin necesariamente profundizar la conciencia revolucionaria en esta materia. En tanto los innumerables logros obtenidos por las clases populares iban a ser mediatizados por el estado, se produciría casi inevitablemente la concepción de que, *como representante de la revolución, es el estado quien da la lucha y quien otorga o pospone el cumplimiento de las reivindicaciones*. En la medida que las condiciones objetivas van dificultando cada vez más dar respuesta positiva a esas reivindicaciones, es asimismo el estado quien aparece negándolas. Ahora bien, por razones objetivas, la lucha de clases, aún con una correlación interna de fuerzas muy favorables al campo popular, no se puede efectivizar durante esta fase en avances continuados y notables en las condiciones de vida de las masas. Eso, *en ausencia de la vivencia directa de la lucha y los obstáculos económicos, requiere entonces de una explicación, de una pedagogía muy especial para justificar por qué la lucha de clases debe tomar la forma de la defensa, de la lucha contra la contrarrevolución, de incremento de la productividad y la eficiencia, o bien, en un nivel más abstracto, centrarse en una lucha contra el atraso*. El grado de conciencia y de visión de la globalidad que requiere asumir estas líneas de acción es difícil de lograr si no va enmarcado en una creciente organización de la clase, la cual a su vez se dificulta si sus luchas específicas en tanto clase están limitadas por la necesidad del orden revolucionario.³⁰

A todo esto debe agregarse la posibilidad de que la naturaleza de las reivindicaciones populares en Nicaragua no haya sido develada adecuadamente por la investigación científica que sustenta las decisiones del estado. Esto es importante, pues *en ausencia del juego abierto de fuerzas y tensiones derivadas de intereses particulares en la economía, sólo la ciencia permite detectar cuáles son esas tensiones subyacentes y sus consecuencias previsibles en diversas coyunturas*. Por ejemplo, durante los primeros años de la revolución, se escuchó con frecuencia la afirmación de que la tierra no era una reivindicación fundamental del campesinado nicaragüense, sobre la base de la historia de las limitadas luchas campesinas durante el somocismo, o bien de algunas encuestas realizadas cuando otras políticas parecían sustituir eficazmente la entrega de tierras para mejorar las condiciones del campo (la de crédito, en particular). Ello resultó no ser válido, al menos para los años subsiguientes. A

³⁰ En otro contexto, el comandante Humberto Ortega reflexionaba sobre el problema de la acumulación de fuerzas de la siguiente manera: "Para realizar estas acciones ofensivas fue necesario que nos desprendiéramos en nuestra conducta de determinado conservadurismo que nuestro movimiento mantenía en la práctica y que lo llevaba a realizar una política de acumulación de fuerzas de manera pasiva... Entiendo por política de acumulación de fuerzas pasivas la política de no participar en las coyunturas, de acumular en frío. Pasiva en la política de alianzas, pasiva en el sentido de pensar que se podía acumular armas, organización, recursos humanos, sin combatir al enemigo, en frío, sin hacer participar a las masas, no porque no quisiéramos hacerlo, sino porque pensábamos que si sacábamos mucho las uñas nos iban a golpear y desbaratar", en Humberto Ortega Saavedra, *Sobre la insurrección*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1981, pp. 67-68.

partir de 1983, la reforma agraria debió efectuar un viraje a favor de la entrega de tierra a familias individuales. Tres factores fundamentales a tenerse en cuenta eran: a] el cambio del contexto socio-político resultante del triunfo revolucionario, que abría nuevas expectativas o permitía el despliegue de reivindicaciones ocultas hasta entonces por la represión somocista; b] la misma crisis económica, conjugada con los costos económicos directos e indirectos de la agresión, que afectaron las condiciones de reproducción del campesinado, y c] aún cuando no fuera una reivindicación “activa”, la entrega de tierras del APP o de grandes productores a campesinos con capacidad excedente de trabajo, era funcional para el desarrollo productivo que requería el país.³¹ Un factor relevante en esto es el rezago entre el momento en que las condiciones subjetivas requieren una respuesta y el momento en que ésta se hace efectiva. En esos interregnos, las condiciones de receptividad de las medidas estatales pueden modificarse por efecto de la misma demora, y lo que antes hubiera sido recibido como conquista revolucionaria ahora debe ser tomado con reticencia de un estado del cual se desconfía. En esto debería considerarse la posibilidad de que el campesinado nicaragüense, por su naturaleza social y su experiencia histórica, tenga *tendencias “antiestadistas”*, prefiriendo no depender del estado o minimizando la interferencia estatal en su reproducción. Incluso, esa tendencia puede haberse acentuado por una inadecuada administración de las políticas por parte de funcionarios no preparados para enfrentar esta nueva “clientela”. Ello puede llevar a ciertas capas del campesinado a rechazar políticas destinadas a favorecerlos –desde una concepción estatal-, tales como el crédito, la sustitución de los canales de comercialización privados por los estatales, e incluso la misma entrega gratuita de tierras, pues anticipa entrar bajo el control estatal, cuya lógica y objetivos resultan extraños a su práctica inmediata de reproducción, basada en otro tipo de relaciones cuyas posibilidades y limitaciones al menos cree conocer.

³¹ Un elemento ideológico que también desempeñó un papel importante en la demora de la reforma agraria para facilitar tierras al campesinado individual, fue la convicción de algunos funcionarios del estado de que el campesinado constituye una clase atrasada, cuya eficacia productiva es necesariamente inferior a la de las empresas estatales o privadas. La práctica fue demostrando que la respuesta del campesinado medio a los incentivos económicos podía ser superior en algunos rubros (algodón, por ejemplo) a la de los sectores empresariales y que, además, producía a menores costos, con un paquete tecnológico menos intensivo en insumos importados. Por lo demás, los límites de la producción estatal en esta coyuntura se hicieron evidentes. Sobre este tema, véase Eduardo Baumeister, “La significación de la pequeña y mediana producción en la agricultura nicaragüense”, trabajo presentado en el seminario sobre Productores Medianos en América Latina, FAO-Centro de Estudios Latinoamericanos de Cambridge, Cambridge, septiembre de 1984 (mimeografiado). Sobre la política agraria, su evolución y su filosofía básica, véase Jaime Wheelock Román, *Entre la crisis y la agresión. La reforma agraria sandinista*, Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1985. Véase también Marvin Ortega, *op. cit.*

La ausencia de una “pedagogía social”

La economía mercantil no oligopolizada funciona como un conjunto de decisiones micro-económicas tomadas por numerosos agentes de diversa naturaleza, con base en objetivos particulares de cada unidad decisional, y cuyos comportamientos están condicionados no sólo por su historia y por los recursos materiales que comandan, sino también por sus expectativas. Éstas son, a su vez, acuñadas y revisadas con base en la práctica repetitiva de cada actividad. En consecuencia, la política económica, al intentar orientar el movimiento de conjunto de la economía, fundamentalmente a partir de la manipulación paramétrica de las variables que condicionan estos comportamientos (precios, restricciones legales, relaciones compulsorias de comercialización, etc.), debe basarse en un conocimiento empírico, teóricamente fundado, de las unidades de gestión y de su articulación en el sistema económico. En ausencia de tal conocimiento, queda como posibilidad apoyar el diseño de la política económica en: a] las teorías más adecuadas a la situación en que se intenta intervenir y/o en: b] la participación directa de los agentes mismos, organizados a tal fin.

Se requiere, entonces, orientar las propuestas de política económica dentro de un marco teórico que incorpore las concepciones básicas de la lucha de clases, así como las que permiten comprender la lógica mercantil que, en muchos sentidos, sigue rigiendo en la economía del país. Pero también es necesario incorporar a los actores directos de la producción y circulación en la discusión y elaboración de los programas económicos para que aporten su experiencia y visión de la situación económica, y asuman convenios con el estado. Así, los resultados previstos de la política superarán el nivel de propuestas estatales, pues los incentivos asignados tendrán como contrapartida necesaria el compromiso formal de obtención de determinadas metas que reflejan el interés general, tal como lo interpreta el proyecto revolucionario en cada coyuntura. En este sentido, el gobierno revolucionario ha mantenido siempre una actitud de clara negociación y de diálogo con los sectores productivos, en particular con la burguesía.³² Sin embargo, no fue fácil

³² Se ha convertido en práctica usual de la gestión económica estatal de revisión de los precios de los principales productos de exportación, a medida que los costos aumentan o cuando, por razones aleatorias (régimen de lluvias, plagas, etc.), las cosechas producen rendimientos inferiores a los estipulados o bien insumen mayores cantidades de agroquímicos. Incluso, a partir de 1982, se ha dado la práctica de revisar precios (por ejemplo, en el caso del algodón) una vez que la cosecha ya ha sido levantada, para cubrir los costos declarados por los productores privados (y estatales). De hecho, las deudas resultantes de una mala cosecha en un régimen crediticio que financia el 100% de los costos variables, tenderían a convertirse en incobrables, puesto que el gobierno revolucionario ha evitado aplicar las leyes heredadas del somocismo por las cuales una deuda impaga sería causal de liquidación judicial de la propiedad. En tal sentido, la revisión de los precios implica que (dada la tasa de cambio) la empresa correspondiente de comercio exterior tiene un déficit mayor, pero el sistema bancario estatal recupera liquidez. En la medida que no operaban los topes de cartera, la liquidez faltante se

instrumentar convenios privados/estatales, y re³³cién en 1985 comienzan a retomarse con fuerza esas formas de socialización. Del mismo modo, los incentivos comienzan a vincularse con el grado de eficiencia empresarial o con la productividad obrera. De hecho, en la práctica misma, la revolución ha aprendido los límites que el mercado impone a la voluntad política en una economía mixta, y la rectificación de la política económica va en la dirección de admitir esos límites, para moverse dentro de las leyes que rigen los mercados, aunque siempre bajo la rectoría del estado revolucionario.

De todas maneras, el conjunto de medidas adoptadas y las oleadas sucesivas de reajuste que sobrevinieron desde febrero de 1985, significan un fuerte *shock* a los parámetros de la actividad económica tanto en lo referente a la producción y circulación, como en lo relativo al consumo (el nivel de inflación anual esperado, cercano al 200% anual, refleja dramáticamente esta situación). (¡!!) En particular, los precios relativos no parecen haber sido tenidos en consideración completa hasta el momento, y se requerirán reajustes adicionales en tal sentido, sea por decisión estatal o por el funcionamiento del mercado. Por lo tanto, ante esta perspectiva, los agentes económicos pueden adoptar actitudes conservadoras e incluso desarrollar nuevas formas especulativas, para no correr riesgos que no pueden siquiera calcular.³⁴

resolvía con una emisión adicional del Banco Central y su transferencia a los bancos de crédito. Todas estas transferencias –abiertas o disfrazadas– entre agencias del estado, hacían difícil poder evaluar el funcionamiento de cada una, así como el cálculo de los resultados económicos de cada subsistema encadenado a actividades de producción y circulación. Si a esto agregamos la existencia de tasas de cambio diferenciales para importación y exportación, de tasas reales de interés negativas, y de subsidios al consumo de los trabajadores, es evidente el alto grado de intervención del estado en el sistema de precios y, a la vez, la enorme dificultad para instrumentar un cálculo económico racional a partir del mismo.

³³ En efecto: la nueva política económica instrumentada desde febrero de 1985 (véase nota 25) comenzó con estimaciones difíciles de sostener sobre el impacto inflacionario que implicarían. Algunas causas son estructurales –irresolubles con una política de ajuste de corto plazo–, otras son derivadas de la misma acumulación de tensiones por la posposición de las medidas. Pero es posible que también operen nuevos errores de concepción y dificultades de implementación. En esto, la falta de consideración sobre los precios relativos y los términos internos del intercambio entre campo y ciudad, en el mercado oficial y en el mercado libre, etc., por un lado, y la priorización de los incentivos a los productores empresariales por encima de las condiciones mínimas de reproducción de las masas campesinas e informales, por el otro, permiten la regeneración de comportamientos no deseados. Si es posible evitar esto en el corto plazo o no, es otra cuestión. Lo que aquí nos interesa señalar es el efecto ideológico y político que puede tener la creación de una *brecha de credibilidad gubernamental* en la crisis y coyuntura de agresión que atraviesa el país. Para un análisis de esta coyuntura, véase E.V.K. FitzGerald, “La economía nacional en 1985. La transición como coyuntura”, ponencia presentada al IV Congreso Nicaragüense de Ciencias Sociales “Hans Gutiérrez Avendaño”, Managua, agosto de 1985, mimeografiado.

³⁴ Al motivo de especulación derivado de las diferencias de precio entre mercados oficiales y paralelos, se agrega ahora el de las expectativas inflacionarias que permiten –con tasa de interés real negativas, y con un dólar en el mercado paralelo altamente estable– ver la acumulación de *stocks* como un negocio superior a otros. Por otra parte, algunos mecanismos correctivos que se intenta introducir encontrarán obstáculos serios. Por ejemplo, la vinculación

Aun cuando algunas de estas consecuencias tienen ya la fuerza de condicionantes objetivados de difícil resolución, para reducir su impacto y evitar un desorden de otra magnitud (lo que sólo puede lograrse si se articula el interés general con los intereses y expectativas particulares de las mayorías), se hace imprescindible acompañar las nuevas medidas con un trabajo de explicación, y con un sistema de recepción sobre la marcha de las reacciones de los diversos sectores. *La continua retroalimentación estado/sociedad civil es necesaria para evitar la acumulación de contradicciones que lleven otra vez a la necesidad de adoptar cambios drásticos en la política económica, que generan una gran inestabilidad y a la vez aumentan la alienación, pues se reciben fuertes impactos inesperados cuya lógica no se comprende a cabalidad. La pedagogía que debe acompañar al diseño e instrumentación de las políticas económicas es un elemento fundamental en la construcción y fortalecimiento del consenso en un sistema político pluralista con hegemonía popular.* La competencia política, incorporada por la revolución como componente constitutivo de la nueva sociedad, deja abierta la posibilidad para la crítica demagógica de los partidos de oposición, en la pretensión de capitalizar el descontento generado por la difícil situación económica. Y en este sentido es fundamental tener en cuenta que, si bien los sectores populares no tienen una visión científica del funcionamiento de la economía ni les resulta accesible el código usualmente utilizado en las comunicaciones gubernamentales, sí tienen un saber popular sobre las condiciones de su reproducción, con base en la experiencia de sobrevivencia que van forjando en sus conciencias, ideologías y visiones sobre el estado, sobre la economía y sobre su propio interés inmediato, y es desde esa configuración ideológica que interpretan los fenómenos a los que están sometidos. Comprender ese punto de partida de la conciencia popular es clave para una comunicación efectiva entre la dirección revolucionaria y las bases sociales. Incluso los mejores esfuerzos pedagógicos realizados para explicar las nuevas políticas apelan a un código que no es el de las masas, sino más bien el de los sectores medios de la sociedad.³⁵ En términos políticos, este aspecto de

de los salarios con la productividad obrera es difícil de instrumentar en una coyuntura en donde la escasez de divisas hace que se racionen los insumos y repuestos, se cumplan jornadas de trabajo irregulares, y que incluso deban cerrarse fábricas por períodos del año. La necesaria vinculación entre la contribución personal o grupal a la producción, por un lado, y el ingreso, por el otro, queda así mediada por factores más allá de la voluntad de los trabajadores. Por otra parte, la selección de actividades prioritarias (en general, las de “producción material”) ignora la efectiva concatenación de éstas con otras actividades productivas y de servicios, sin las cuales su producto no puede realizarse, creando posibilidades de sufrir cuellos de botella que anulen el efecto productivo buscado. Si la dirección económica no tiene en cuenta las verdaderas articulaciones del sistema económico, los efectos de la política estatal sobre la conciencia y los comportamientos de los agentes económicos, difícilmente se orientarán en la dirección propuesta.

³⁵ Una encuesta realizada entre febrero y abril de 1985 en 23 centros de trabajo en la ciudad de Managua, incluyendo a 110 integrantes de los Colectivos de Educación Popular (CEP) (alumnos, coordinadores y promotores), arrojó algunos resultados que sustentan esta afirmación. Aunque de hecho todos ellos están expuestos al Programa de Educación de Adultos del Ministerio de

la política económica es crítico, posibilita sostener e incluso desarrollar el consenso y la acumulación activa de fuerzas en momentos de crisis económica, y enfrentar tensiones en el campo popular que pocos gobiernos podrían resistir.³⁶ Pero, por otra parte, su ausencia impide enriquecer la práctica revolucionaria con la creatividad y el saber popular.

LOS “COSTOS POLÍTICOS” DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Esta etapa de la revolución nicaragüense se caracteriza por la tarea de consolidar el poder revolucionario de acuerdo con los principios del proyecto sandinista (poder popular, pluralismo político), y de enfrentar los costos económicos y humanos de la agresión imperialista en el contexto de una economía heredada incapaz de responder con flexibilidad a la crisis internacional, partiendo de un nivel de desarrollo que sitúa a Nicaragua entre los tres países más pobres de América Latina. *Si en esta etapa lo político sobredetermina lo económico ¿cómo conjugamos esa afirmación con el principio materialista de que lo económico es determinante en última instancia?*

Educación, y además un 92% lee los diarios, un 82% escucha la radio y un 65% ve la televisión, la encuesta muestra que: un 82% no pudo dar una cifra porcentual aproximada a la obtenida por el FSLN en las recientes elecciones, lo que muestra las dificultades para manejar cifras porcentuales, tan utilizadas en las explicaciones sobre la economía; un 43% no tenía idea clara sobre qué era el APP, su naturaleza y sus funciones; y un 37% no tenía ninguna idea sobre las medidas económicas de reajuste. Otros datos relativos a esta encuesta pueden encontrarse en: Rosa María Torres, “Los CEP: educación popular y democracia participativa en Nicaragua”, CRIES, Managua, abril de 1985, ponencia presentada al IV Congreso Nicaragüense de Ciencias Sociales “Hans Gutiérrez Avendaño”, Managua, agosto de 1985, mimeografiado.

En realidad, se realizan grandes esfuerzos para explicar al pueblo la situación. Desde los “De cara al pueblo” (programas en los que el gabinete de gobierno en pleno enfrenta reclamos y dialoga con diversos grupos locales o sectoriales), hasta numerosas intervenciones individuales de los dirigentes revolucionarios, hay una enorme cantidad de exposiciones sobre la coyuntura, las políticas estatales, etc. Pero el discurso en general, no es adecuado a las reales condiciones de recepción de las masas, ni utiliza los canales más eficientes. Una auténtica *pedagogía popular* requiere partir del código popular y, a la vez, hacer de ella una actividad continua ejercida por una multiplicidad de cuadros intermedios, desde sus relaciones específicas con los diversos sectores de la sociedad, y con una visión común de la problemática coyuntural.

³⁶ A este respecto, en el cierre del “Diálogo con los productores”, el 16 de febrero de 1985, el comandante Daniel Ortega señalaba: “Nosotros decimos a veces: ‘Les debíamos dar el gobierno, que cojan el gobierno, estos partidos de derechas o de ultraizquierda que dicen que tienen la fórmula mágica para resolver los problemas económicos; deberíamos de darles el gobierno y pasarnos a la oposición, y vamos a montarles huelgas todos los días, y vamos a hacer trabajo político, y vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo resiste ese gobierno? Aquí no habría gobierno de partido alguno, del COSEP, que resistiera una semana, quince días, teniendo al FSLN en la oposición. No resistiría.’ Entonces, es una realidad la fuerza política del FSLN en esta revolución y no podemos ignorarla, es una realidad”, en *Barricada*, 18 de febrero de 1985.

Para comenzar, lo “económico” debe ser interpretado más ampliamente como “lo material”, vale decir, lo que permite la reproducción de la vida humana. Esto es particularmente importante en un país enfrentado a una guerra de desgaste, donde los límites a la vida vienen planteados no sólo por las dificultades de reproducción económica de las clases populares, sino también por la posibilidad directa de morir en la guerra antiimperialista. En este sentido, *la seguridad de la protección militar contra los ataques contrarrevolucionarios y la seguridad de la reproducción económica (acceso a recursos productivos, abastecimiento) no pueden ser disociadas, pues ambas son condición para mantener cohesionada la sociedad civil en una coyuntura crítica.*

La sociedad en su conjunto enfrenta el desafío de mantener un proyecto de unidad nacional, para consolidar el frente antiimperialista y fortalecer las alianzas internacionales con aliados estratégicos de los Estados Unidos que, sin embargo, cuestionan la legitimidad de la intervención norteamericana en este país. Esto requiere, a la vez, reproducir clases privilegiadas (sectores productivos de la burguesía, profesionales y técnicos, sectores formales de la circulación mercantil) y, por otro lado, lograr la reproducción de las clases fundamentales de la sociedad, que en este proceso contribuyen masivamente a construir el sujeto histórico de la revolución: obreros, campesinos, pero también sectores pobres no integrados a la división social del trabajo de manera formal (los cuales tomaron parte determinante en la insurrección).³⁷

La afirmación de que lo político tiene autonomía relativa es válida en determinadas coyunturas y, particularmente, se aplica al caso de la revolución sandinista que, como revolución política contra una dictadura, surgió triunfante en una coyuntura en donde no se visualizaba aún la crisis económica que se gestaba en el modelo económico agro-exportador. Sin embargo, la voluntad política no puede sustituir sin límites las condiciones materiales de la existencia humana y, en determinado momento, la crisis de reproducción puede comenzar a operar efectos ideológicos y eventualmente políticos, contrarios a la consolidación revolucionaria. Los límites más allá de los cuales la penuria económica –o el interés privado insatisfecho de sectores privilegiados- pueden comenzar a operar una reversión del apoyo a la revolución, son difíciles de determinar. *El pueblo nicaragüense ha demostrado una dignidad histórica, que el sandinismo ha convertido en una fuerza nacional, capaz de enfrentar a la primera potencia mundial. Esto hace difícil establecer límites, incluso biológicos, al sacrificio material que este pueblo está dispuesto a soportar para sostener el derecho a la autodeterminación.* Sin embargo, la nueva sociedad, el hombre nuevo, son todavía un proyecto, y siguen operando también valores y pautas de comportamiento forjados en el pasado somocista.

³⁷ Para un tratamiento de algunos de estos temas, véase Carlos M. Vilas, “Nicaragua año V: transformaciones y tensiones en la economía”, CIDCA, Managua, febrero de 1985, mimeografiado. También del mismo autor, véase *Perfiles de la revolución sandinista*, Buenos Aires, Editorial Legasa, 1984.

En lo que respecta a las masas, el hecho de que las leyes de la historia indiquen que éste es su proyecto histórico, no garantiza siempre su disposición a seguir cualquier dictado en cuanto a su comportamiento económico, por funcional que sea a la coyuntura revolucionaria. *Por debajo de ciertos niveles de vida, tiende a primar la búsqueda de estrategias de sobrevivencia que garanticen al menos la reproducción de la familia.* Y en esto el nicaragüense muestra una habilidad enorme para adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes, buscando la forma de reinsertarse en el sistema de relaciones económicas para mejorar o impedir el deterioro de su posición. Para lograrlo, se basa en su historia prerrevolucionaria de sobrevivencia en condiciones de pobreza, pero también en lo experimentado en estos seis años de gobierno revolucionario. En tal sentido, ya la revolución ha contribuido a forjar o consolidar pautas de comportamiento económico, a través de su manejo de la política económica (en el sentido amplio definido al comienzo de este trabajo). La especulación, por ejemplo, es un producto no sólo de la escasez, sino también de las amplias posibilidades que el manejo estatal de los mercados le ha abierto sistemáticamente durante estos años. En particular, es importante destacar que, a partir del tratamiento fragmentario de los diversos mercados, se produjo una crisis de dirección económica, la cual estalló por dos mercados que tienen la virtud de interrelacionar y articular toda la economía: el mercado del dinero y el mercado del trabajo. Pero fue este último, evidentemente, el que hizo políticamente impostergable la decisión de rectificar la política económica, pues sus distorsiones tenían implicaciones no sólo económicas sino directamente sociopolíticas (las tendencias a la disgregación de las clases fundamentales de la revolución).

Cuando las masas perciben los efectos (aunque no la lógica última ni los objetivos) de la política económica, personificada además con las caras y comportamientos que el estado le presenta (el funcionario público en sus diversas variantes), es natural que, como masa, con un proceso incompleto de organización y constitución de su identidad como clase, *tienda a resistir las indicaciones taxativas sobre lo que debería hacer "para ser revolucionaria", en tanto todas o buena parte de las estructuras en que se desenvuelve su práctica reproductiva le están indicando otro mensaje.* En esto, es fundamental reconocer que puede haber una contradicción entre los contenidos del discurso revolucionario y los del discurso implícito en las condiciones económicas intervenidas por el mismo estado.

Por supuesto, es necesario diferenciar el componente atribuible a condiciones objetivas inevitables (la crisis económica, los costos de la agresión, la herencia somocista) y el margen de acción que el estado tenía y tiene para la gestión económica dentro de esos marcos dados. *La reciente rectificación en febrero de 1985 afirmó, de hecho, que ese margen no era poco importante, y estableció como principio que la vigilancia política de la política económica debe ser ya un elemento constitutivo del orden revolucionario.* Porque el efecto político-ideológico del desorden económico, de la presión para sobrevivir

individualmente, más allá de la definición del interés general planteado por la dirección revolucionaria, no sólo no se ha desvanecido automáticamente con las nuevas medidas económicas, sino que persiste e incluso puede ampliarse en tanto no se logre una mayor estabilidad en las relaciones económicas y una mayor transparencia sobre las perspectivas futuras. *Una consecuencia política posible de esta situación es que las organizaciones de masas, componente fundamental de las fuerzas revolucionarias, pueden tender a “vacarse” de bases sociales en la medida que a] aquéllas no representen sus intereses inmediatos, o no partan de su problemática acuciante de reproducción y b] la misma identidad de sus miembros esté en constante cuestionamiento por las estrategias complejas de sobrevivencia que se ven compelidos a adoptar* (lo que se manifiesta más dramáticamente por los procesos de urbanización acelerada, el regreso a formas de producción que se consideran superadas, y la tendencia al “business”, generalizada entre la población).

Tal como en 1985 lo está haciendo la revolución, es necesario profundizar la relación con las bases, partiendo de sus visiones del mundo, sus necesidades inmediatas, sus comportamientos reales, sus expectativas, y propiciar formas de organización que surjan desde abajo, con la fuerza que proporciona la articulación del interés particular con la inserción en un sistema político-económico que vaya definiendo colectivamente el interés general mediante la conjunción de los principios revolucionarios con la trama de necesidades materiales insoslayables de las masas. La crítica que la revolución está haciendo de las organizaciones de masas es clave en este proceso.³⁸ La recomposición de estructuras de comunicación, solidaridad y organización desde los niveles locales y sectoriales específicos, es asimismo condición para asegurar que las políticas económicas y sociales del estado no se diseñen e implementen en el vacío. Pero, por sobre todo, la crítica implica recuperar la unidad entre economía y política. El proyecto político sandinista se plantea democratizar el poder, desarrollar la participación pluralista, admitir la diferencia ideológica dentro de un proyecto de liberación nacional, y esto debe actuarse y corresponderse no sólo en las instituciones y relaciones específicamente políticas, sino también *dentro* del campo de la gestión económica. El trabajo ideológico y político para crear una conciencia revolucionaria puede ser anulado si la alienación económica resultante del trastrocamiento brutal de las condiciones de vida, sin lógica aparente y sin una pedagogía social participativa, presiona a las masas a luchar por su sobrevivencia material inmediata por sobre todas las cosas, máxime en una sociedad donde persiste una evidente desigualdad social.

Es posible visualizar lo ocurrido en estos últimos años como un signo de vitalidad y de seguridad en el futuro de este proceso. *La “resistencia” de las*

³⁸ Véase por ejemplo, el discurso de clausura del Consejo Nacional de los CDS por la comandante Leticia Herrera, “Fortalecer los CDS con nuevo estilo de conducción”, en *Barricada*, 29 de agosto de 1985.

masas a los dictados de una política económica que le enviaba mensajes contradictorios (por un lado se planteaba la necesidad del trabajo productivo, por el otro se alentaba en lo concreto el improductivo) y, en consecuencia, su reticencia ante el discurso estatal, fue sin embargo acompañada del apoyo masivo al proyecto revolucionario en las elecciones de noviembre de 1984. Esto muestra que, a la vez que el pueblo nicaragüense puede discriminar y no aceptar cualquier consigna si va en contra de sus tendencias más elementales, está claramente comprometido con el proyecto sandinista de construcción de una nueva sociedad y con la lucha antiimperialista. Es responsabilidad de los diversos aparatos de estado el no producir innecesariamente efectos ideológicos contraproducentes con esa tendencia fundamental del pueblo hacia su liberación. Pero lo que la experiencia de la transición nicaragüense muestra es que para garantizar que el estado se haga coherente en su dirección económica y vincule lo político con lo económico de manera sistemática, es fundamental incorporar a las masas organizadas en un papel más activo en la gestión participativa de la economía y realizar una verdadera revolución cultural en la comunicación social, que parta del saber y las expectativas populares transformándolos en conciencia revolucionaria mediante la socialización del conocimiento científico de la realidad, de la globalidad. Ésta es una misión fundamental de la revolución, que a su vez requiere una revolución cultural conducida por la dirección política en el interior del estado, no tanto como imposición externa sino como resultado de la puesta en práctica de una propuesta estratégica explícita, apoyada en conocimiento empírico fundado científicamente. En este sentido van sin duda los cambios experimentados en las estructuras y políticas del estado en lo que va de 1985.

En resumen, aunque no pueden ser cuantificados, como lo son los costos económicos de la agresión³⁹ o de un desastre natural, los “costos políticos” de la política económica deben ser considerados explícitamente en la gestión económica, pues hacen al fortalecimiento de las clases fundamentales de la revolución, a la conformación del poder popular, a una relación revolucionaria entre estado y sociedad civil, a una coherencia fundamental entre comportamientos individuales o colectivos y estructuras en cambio, condiciones todas ellas indispensables para conformar un bloque impenetrable a la guerra de desgaste que el imperialismo ha emprendido contra este país. Y en este propósito, la teoría y la investigación (científica y participativa) pueden tener un papel crucial, a veces temido por la burocracia estatal porque implica la posibilidad de evaluar objetivamente sus acciones. Como decía hace poco el comandante Tomás Borge: “Una realidad que no se investiga es una realidad

³⁹ A este respecto, véase el análisis presentado en E.V.K. FitzGerald, “Una evaluación del costo económico de la agresión del gobierno estadounidense contra el pueblo de Nicaragua”, ponencia presentada en el Congreso de la Latin American Studies Association (LASA), Albuquerque, Estados Unidos, abril de 1985, mimeografiado.

desconocida. Y una realidad desconocida es una realidad que no se puede transformar...”⁴⁰

EPÍLOGO: SOBRE LA NATURALEZA DEL ESTADO EN LA TRANSICIÓN DE NICARAGUA

La revolución sandinista está produciendo en Nicaragua transformaciones económicas, políticas y sociales a partir de una situación de país pequeño, periférico, agro-exportador, cuyo atraso económico estaba en concordancia con el atraso político reflejado en una dinastía de cuarenta y cinco años de duración. Hay, pues, un proceso de transición desde el capitalismo periférico hacia una formación social cuyas características esenciales no pueden, a nuestro criterio, definirse en 1985 con un único término. Hay una socialización de la economía que se sale del carril capitalista privado y dependiente del imperialismo, y hay un proceso de democratización política que ha entrado ya en una fase de rápida institucionalización. Hay una redefinición drástica de las funciones del estado, resumidas en la frase “rector de la economía” en lo que hace a las condiciones materiales, pero también hay una redefinición del proyecto nacional, marcadamente antiimperialista, orientado hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la defensa de la soberanía nacional.

Por su propia naturaleza, el proyecto de unidad nacional –condición de eficacia del proyecto antiimperialista en la coyuntura mundial actual- implica una sociedad pluriclasista, un sistema político pluripartidista, y la libre expresión de los intereses particulares a través de organizaciones y medios de comunicación. La constitución de un sistema social cohesionado por ese proyecto, bajo la hegemonía popular vanguardizada por el FSLN, determina en buena medida la naturaleza del estado. La dominación de las minorías por parte de las mayorías, así como la construcción continua del consenso social, predisponen a la reproducción de la separación entre economía y política que caracteriza al estado capitalista: democratización política y concentración del poder económico, en este caso a manos del estado revolucionario.

Pero esta separación es ficticia. No puede haber poder popular en lo político si se reproduce la alienación de las masas ante el proceso económico. Lo político y lo económico no son, ni en la realidad capitalista ni en la realidad de la transición desde el capitalismo, efectivamente separables, salvo en las formas. Pero tampoco son la misma cosa. No puede identificarse el peso relativo del control de medios de producción por parte de los diversos actores de la producción (área propiedad del pueblo, capitalismo privado, productores

⁴⁰ Tomado de una intervención del comandante Borge al visitar un centro de investigaciones sociales en Managua.

independientes) como una “correlación de fuerzas” políticas. El monopolio de la fuerza por parte del estado popular da, de por sí, un contenido distinto a las relaciones de producción. La propiedad privada de medios de producción no tiene el mismo contenido en un contexto de poder revolucionario, como tampoco tienen el mismo contenido las relaciones salariales. Pero todo esto supone un estado efectivamente articulado con el poder popular, ejercido de manera crecientemente efectiva por las masas organizadas. Esa organización, hemos intentado señalar, difícilmente puede ser revolucionaria si no se realiza conjuntamente con el desarrollo de las contradicciones de la sociedad civil, con las luchas sociales internas, aun dentro de un orden revolucionario que garantice la cohesión social. Y esto requiere que la relación estado/sociedad civil sea redefinida en el campo de la economía, descentralizando el poder, o bien permitiendo su generación bajo nuevas formas desde las bases sociales de la revolución. Por lo demás, el atraso del estado heredado tiene una inercia histórica tan fuerte que podría impedir el desarrollo social mismo, asfixiando la creatividad popular. Hemos intentado mostrar la incapacidad del estado para gobernar la economía sin la participación activa de la sociedad civil, a partir de una aproximación a la experiencia de gestión de la política económica en estos seis años de transición en Nicaragua.

Hemos intentado mostrar que el poder estatal tiene límites en la Nicaragua actual: los derivados de la herencia somocista, pero también los que le pone la resistencia de la sociedad civil cuando sus políticas afectan las condiciones más elementales de reproducción, particularmente de las masas, o cuando la credibilidad cae y se erosiona la legitimidad de la burocracia para regir la economía. Señalamos también, y remarcamos aquí, que la dirección política sandinista, el FSLN, al enfrentar fuerzas opuestas, ha podido mostrar un pragmatismo, una habilidad para adecuarse a la correlación de fuerzas y a las condiciones materiales, incluso para revisar metas y objetivos, que dan un sentido muy trascendente a las rectificaciones recientes, tanto en la política económica, como en lo referente al estado y a las organizaciones de masas.

El proceso de construcción de una democracia efectiva pasaría entonces necesariamente por una creciente democratización de la economía, lo que implica una verdadera revolución social en el seno de la sociedad civil y, a la vez, una revolución cultural en el nivel estatal, la cual difícilmente podría darse exclusivamente desde la cúpula del estado, sin la participación activa de fuerzas sociales organizadas autónomamente en la escena político-social. En este proceso, el papel de la vanguardia, no “simbiotizada” con la burocracia estatal ni confundida con las organizaciones de masas, es central para articular y garantizar la dirección del mismo. Si esto se da, la separación entre economía y política pasará a ser sustituida paulatinamente por una imbricación que garantice el poder popular y la modalización societal bajo la lógica de las mayorías.

Tal democratización no se reduce a la gestión obrera en unidades de producción (lo que usualmente se ha denominado “democracia directa”)

combinada con mecanismos de representación política vía elecciones universales y recurrentes que instauren la división entre representantes y representados. El término de “democracia participativa” utilizado en Nicaragua, tiene otras implicaciones institucionales. Supone la creación de foros y ámbitos de acción donde se reflejen las múltiples contradicciones que atraviesan la sociedad, donde los intereses particulares vayan convergiendo en la definición del interés general, en cuya ecuación el peso de las clases populares sea determinante. Implica que la “cuestión campesina”, o los términos de las relaciones campo-ciudad, o la “cuestión burguesa”, o la cuestión étnica, puedan encararse como cuestiones *nacionales*, con la activa participación directa de toda la ciudadanía, y no como cuestiones particulares de reivindicación de grupos o sectores ante el estado omnipresente. Posiblemente, el ejercicio de democracia que se realiza actualmente en Nicaragua, alrededor de la definición de una nueva constitución, para el cual se intentará convocar verdaderos “cabildos abiertos”, marque las pautas de una modalidad de participación que podría hacerse extensiva a otras esferas de la problemática social, particularmente a la económica.⁴¹

⁴¹ En muy diversos campos se presenta la misma disyuntiva para modificar “estructuras mentales” y comportamientos del pueblo, cabe que el estado diagnostique la “inmadurez”, o el atraso popular, y asuma la responsabilidad de imponer restricciones o abrir posibilidades nuevas para canalizar las necesidades y potencialidades de las masas, o bien que éstas participen en la definición y ritmo de esos cambios. El caso de la política hacia el campesinado es recurrente en estos procesos, y está referido en otros trabajos de este mismo volumen. Otro ejemplo sería el tratamiento de lo sexual en las películas y serie de televisión. Si el estado simplemente decide anular su difusión y reemplazarlas por materiales educativos de carácter científico, puede encontrar el rechazo de la población. Si, en cambio, se plantea la discusión abierta, de modo que en diversas instancias de organización social (organizaciones de mujeres, barriales, iglesias, partidos políticos, etc.) se desencadene una amplia discusión sobre el tema, penetrando en la familia, en las fábricas, etc., los resultados pueden ser asombrosos en cuanto a la coincidencia con la propuesta estatal, o bien diferir, pero en todo caso habría habido un proceso de generación de nueva conciencia y, a la vez, una formación tanto de los “comunicadores” sociales como de la población en general y se sabría a ciencia cierta cuál es la opinión y punto de partida popular en ese tema. Poner el centro de decisión en el estado puede conducir, por el contrario, al “populismo”, por el cual, ante la reacción negativa del pueblo, se termina “concediendo” sin transformación la *reproducción* de lo “popular”, producto del régimen prerrevolucionario. (En lo que hace a las películas cercanas a la pornografía, mientras en la ley general sobre medios de comunicación social del 16-8-1979 se prohibía la utilización de “la mujer como objeto sexual o comercial”, en 1985 proliferan exhibiciones cinematográficas que contradicen esa regulación.) Otro tanto podría hacerse con la censura periodística. Si se lanza una discusión sobre qué hacer con el diario *La Prensa*, unos podrán abogar por su cierre total, pero otros pueden plantear que eso implicaría una gran debilidad de los revolucionarios al no poder contestar al enfrentamiento ideológico que significa su publicación, y surgir nuevas propuestas críticas de cómo encararlo, que no entrarían en el campo de posibilidades imaginadas por los expertos... Estos procedimientos involucran masivamente a la población (con mayor posibilidad en ámbitos urbanos), desarrollando el criterio autónomo, obligando a los dirigentes revolucionarios medios a enfrentar el criterio popular cargado de las herencias del pasado, y permitiendo fortalecer y dar sentido a las organizaciones, poniéndolas a prueba para convocar y funcionar como foros. La cuestión misma de la Costa Atlántica podría ser tratada como una *cuestión nacional*,

En la medida que estas tendencias se acentúen y consoliden, será absurdo caracterizar al estado nicaragüense como “capitalista”, como “populista” y mucho menos como “bonapartista”, rasgos éstos que, aunque parcialmente podrían reaparecer en instituciones o relaciones específicas, no resumirían la naturaleza de un estado en transición, sujeto pero también objeto inacabado de transformación de la revolución popular sandinista.

participando en su discusión no sólo las comunidades étnicas, sino *toda la población* del país. De lo contrario, se plantea inevitablemente el problema posterior de “educar” a los sectores del pueblo que siguen siendo, en muchos sentidos, racistas, rasgo que no se borra con propaganda.

Obviamente, esto debe ser puesto en el contexto difícil que enfrenta la revolución sandinista: guerra y crisis económica. Pero, a nuestro juicio, el menos en la coyuntura de 1985, es el segundo factor el principal obstáculo para avanzar en un proceso de democratización, pues la tendencia a centrarse en la búsqueda de nuevas estrategias de sobrevivencia frena la participación de una manera más contundente y generalizada que la guerra.

Una experiencia muy relevante en lo que toca a la posibilidad de discutir colectivamente problemas económicos en un país atrasado, sin tradición de participación popular, es el caso de Granada. La discusión del “presupuesto del pueblo” (1982) no sólo obligó a los técnicos del estado a encontrar la manera de presentar la problemática económica a partir de la realidad cotidiana del pueblo (por ejemplo a partir del presupuesto familiar), sino que los puso en aprietos pues en las asambleas surgieron contradicciones en los documentos, que el pueblo descubrió. Asimismo, numerosas ideas y propuestas concretas de acción fueron sugeridas en las reuniones que —desde abajo hacia arriba— fueron realizándose.

La “...desmitificación del ‘reino de la economía’ así como de sus portadores... atacando desde sus raíces la burocratización del estado...” hizo que “como nunca antes, a partir de ese momento el pueblo pasó a asumir como verdaderas cruzadas los esfuerzos por levantar la productividad, combatir la corrupción y el despilfarro, e integrarse a las jornadas de trabajo voluntario”. Véase Rosa María Torres, *Educación y democracia en la Granada revolucionaria*, Managua, Cuadernos de Pensamiento Propio, Serie Ensayos, núm. 8, INIES, mayo de 1984. El hecho de que la revolución granadina haya sufrido un desenlace tan negativo no debería confundir al campo revolucionario, que debe proseguir el estudio crítico de esa experiencia y recuperar sus grandes contribuciones a la práctica de transición social en pequeños países de la periferia.